

LAS OTRAS VIOLENCIAS EN AMÉRICA LATINA



JUSTÍCIA I PAU

CENTRE D'ESTUDIS
PER A LA PAU
JMDELÀS

INFORME
núm. 16

INFORME núm. 16

LAS OTRAS VIOLENCIAS EN AMÉRICA LATINA

**Pere Ortega
Moara Crivelente**

Centre d'Estudis per la Pau J.M. Delàs · Justícia i Pau
Barcelona, enero 2013



Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs
Justícia i Pau · Rivadeneyra 6, 10è
08002 Barcelona
T. 93 317 61 77
F. 93 412 53 84
www.centredelas.org
info@centredelas.org

Los autores quieren agradecer la contribución de Sara Gómez
en la revisión y corrección de este trabajo

Barcelona, enero 2013

Grafismo: Fundació Tam-Tam

Portada:
Pintadas críticas con el proyecto minero Conga en Perú
(foto: Intermedia Producciones)

D.L.: B-19744-2010
ISSN: 2013-8032

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	7
2. SEGURIDAD Y VIOLENCIA EN LATINOAMÉRICA.....	9
3. DESIGUALDAD SOCIAL.....	11
4. LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS ...	12
5. LA VIOLENCIA CARCELARIA.....	14
6. CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y CULTURALES.....	15
6.1. Argentina.....	16
6.2. Bolivia.....	18
6.3. Ecuador.....	18
6.4. Perú.....	19
6.5. Brasil.....	19
7. COLOMBIA.....	22
8. GUATEMALA.....	23
9. MÉXICO.....	24
10. VENEZUELA.....	26
11. INDICADORES DE VIOLENCIA.....	28
12. CONCLUSIONES.....	30

RESUMEN EJECUTIVO

En este trabajo sobre **Las otras violencias en América Latina** no se abordan aspectos propiamente militares. Esto es debido a que ello ya fue llevado a cabo en un trabajo anterior *Militarismo en América Latina*.¹ En este nuevo Informe se abordan las *otras violencias*, aquellas que habitualmente no forman parte de los estudios sobre *conflictos armados*. Es decir, las violencias, también armadas, que se derivan de luchas sociales y que los centros de estudios sobre conflictología no evalúan. En unos casos, conflictos socio-ambientales por el expolio de territorios ocupados por comunidades de campesinos (deforestación, ganadería y agricultura intensiva, o minería extractiva) que, mediante la ocupación de tierras, expulsan a los campesinos; en otros, por demandas de derechos culturales de las comunidades indígenas, también ligados a cuestiones ambientales o de acceso al agua potable. También pueden deberse a conflictos del crimen organizado derivados del cultivo, producción y tráfico de la coca, del tráfico de personas, inmigración, trata de mujeres para la prostitución; o a la violencia que se desencadena en la represión de todos estos conflictos y que se concentra en las cárceles.

Un indicador que señala la importancia de esas otras violencias son las tasas de homicidios. Muchos son los países que teniendo conflictos armados internos no superan las tasa media mundial de 8,8 por cien mil habitantes. En cambio, en su conjunto, los países de Latinoamérica ofrecen una tasa de homicidios de 19,9 por cien mil habitantes. A su vez, el continente contiene 50 ciudades entre las 100 más peligrosas del mundo, siendo Ciudad Juárez de México la que tiene la tasa más elevada (229 por cien mil). Esto demuestra que muchos son los países que, sin padecer ninguna guerra civil ni guerrillas internas que provoquen un número importante de muertes, tienen conflictos de otra naturaleza a los considerados como de tipología política o de guerra clásica como lo es Colombia, pero que en cambio tienen unas tasas muy elevadas de muertes. Son los casos de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Belice, Panamá, Honduras, Brasil, Perú y México.

El sufrimiento que estos tipos de violencia acarrear a la población no está al margen del resto del mundo, especialmente del denominado *mundo civilizado* u *occidental*, sino que tienen que ver y dependen precisamente del sistema de vida *occidental*. Surgen del sistema económico capitalista y político liberal, el cual alimenta estos conflictos a través de las redes del comercio internacional, ya sean legales (monocultivos y extractivos) o ilegales (tráfico de drogas, armas y personas). Este razonamiento vale igualmente para los países africanos, asiáticos o americanos del centro y del sur, pues todos ellos viven bajo la nueva égida de la globalización capitalista que desestructura países y debilita los estados que se ven imposibilitados para proteger sus sistemas de vida sociales y hacer frente a las imposiciones exteriores de los *mercados*.

1. Ortega, Pere, Gómez, Juan Sebastián (2010), *Militarismo en América Latina*, Quaderns per a la Solidaritat nº 39, Barcelona, Centre d'Estudis per la Pau JM. Delàs de Justícia i Pau

La mayoría de estas violencias son debidas a una distribución desigual de la riqueza y, por lo tanto, ligadas a cuestiones estructurales. Frente a ello, se oponen las propuestas de los movimientos sociales locales que reclaman un desarrollo ligado a los *derechos económicos, sociales y culturales* de la población, que traducidos al lenguaje común se sintetizan en la demanda cada vez más generalizada del ejemplarizante *Sumak kawsay* (bien vivir) y de vivir en paz con la *Pacha Mama* (naturaleza), que debería conducir a un entendimiento y armonía entre gobiernos y movimientos sociales que no siempre es fácil de compaginar, pues Latinoamérica es rica en recursos fósiles y materias primas no renovables sobre las que ejerce una fuerte presión la demanda de los países industrializados.

Así, los países de la región están cada vez más asediados por transnacionales que, en su búsqueda de lucro, contaminan y desalojan a la población con el desarrollo de proyectos mineros, hidroeléctricos, ganaderos, pesqueros y de monocultivos intensivos. Para impedir estas iniciativas y librar a los territorios ricos en biodiversidad de la explotación de las grandes corporaciones, se hace necesario que las organizaciones de defensa de los campesinos y de las comunidades indígenas, sigan coordinando sus luchas y resistencias presentando demandas ante sus gobiernos y los organismos regionales e internacionales competentes.

Pere Ortega · Investigador del Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs
Moara Crivellente · Politòloga y periodista especialista en conflictos

En este informe no se abordarán los aspectos propiamente militares, sino los relacionados con aquellas violencias que no forman parte de los estudios sobre *conflictos armados*

1. INTRODUCCIÓN

Este trabajo es la continuación de un trabajo anterior que, bajo el título *Militarismo en América Latina*, abordaba el creciente aumento del gasto militar en Latinoamérica hasta el punto de convertirse en los años 2000 a 2009 en la región con mayor aumento de gasto militar del mundo.¹ En ese Informe se analizaba cómo los estados latinoamericanos en lugar de rebajar el peso de lo militar en los asuntos internos, lo estaban incrementando en aras de aumentar su poder geoestratégico en la región, en unos casos por rivalidades entre países, caso de Colombia y Venezuela; en otros, por las ansias de convertirse en potencia regional, como Brasil; o en el caso de Perú y Chile, con el argumento de modernizar sus fuerzas armadas mediante la adquisición de nuevos armamentos para adaptarlas a las exigencias de los nuevos riesgos sin especificar con claridad de dónde proceden y cuáles son las amenazas.

En aquel trabajo también se analizaba el eterno problema de la política exterior de Estados Unidos de inmiscuirse en la política interna de la región a través de la presencia y ayuda militar a diversos países aliados mediante el establecimiento de bases. Las más importantes en Colombia y Panamá, y otras instalaciones menores en Paraguay, Perú, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala. Bases e instalaciones que se justificaban por la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y que sirven de sustento para llevar a cabo programas como el Plan Colombia, el Plan Puebla-Panamá o la Iniciativa Mérida. Programas que en mayor o menor medida intervienen en la política interna regional. Además, EEUU continúa manteniendo un Comando Sur de fuerzas militares operativo con diversas unidades dispersas por Florida y el Caribe y una IV Flota de la armada que patrulla por Centroamérica y el cono sur americano.

Presencia, vigilancia y control en una región que en el pasado ha sufrido intervenciones directas e indirectas, mediante el apoyo de EEUU a golpes de estado militares. Si bien hoy esa amenaza ha disminuido, existen fundadas sospechas de que los derrocamientos en junio de 2009 de Manuel Zelaya, presidente de Honduras, y en junio de 2012 de Fernando Lugo, presidente de Paraguay, se llevaron a cabo con el conocimiento previo de las agencias de seguridad de EEUU. Es imposible que el golpe dirigido por militares que acabó con el gobierno de Zelaya en Honduras se perpetrara sin el consentimiento de EEUU, cuando los norteamericanos mantienen una presencia militar en el país y son un aliado incondicional.

En este nuevo trabajo no se abordarán los aspectos propiamente militares, sino los relacionados con aquellas violencias que no forman parte de los estudios sobre *conflictos armados*. Es decir, aquellos que los centros de estudios sobre conflictología evalúan, y que se dirimen por luchas por el poder interno o entre estados, ya sean territoriales, fronterizos o internacionales. Son aque-

1. SIPRI Yearbook 2010, p. 214

Las violencias que afectan a los campesinos tienen que ver con las economías de subsistencia que dan ocupación a un 30% de la población total latinoamericana

En su conjunto, en 2007, los países de Latinoamérica ofrecieron una tasa de 19,9 por cien mil habitantes, mientras la media mundial está en 8,8

llas otras violencias, también armadas, pero que derivan de luchas sociales. En unos casos, conflictos socio-ambientales por el expolio de territorios ocupados por comunidades de campesinos (deforestación, ganadería y agricultura intensiva, o minería extractiva) que, mediante la ocupación de tierras, expulsan a los campesinos; en otros, por demandas de derechos culturales de las comunidades indígenas, también ligados a cuestiones ambientales o de acceso al agua potable. También pueden deberse a conflictos del crimen organizado derivados del cultivo, producción y tráfico de la coca, del tráfico de personas, inmigración, trata de mujeres para la prostitución; o a la violencia que se desencadena en la represión de todos estos conflictos y que se ejemplariza en la violencia carcelaria.

No hay que olvidar que en América Latina aún existen 17 millones de pequeñas unidades agrícolas cultivadas por unos 40 millones de campesinos para el autoconsumo. Éstos ocupan el 34,5% de la superficie cultivable en 60,5 millones de hectáreas, donde se producen el 51% del maíz, el 61% de las patatas y el 77% de las judías de toda la región.² Con lo cual, las violencias que afectan a los campesinos tienen que ver con las economías de subsistencia que dan ocupación a un 30% de la población total latinoamericana que sigue viviendo en zonas rurales.

Un indicador que señala la importancia de esas otras violencias son las tasas de homicidios, que se tornan más preocupantes cuando superan el diez por cien mil habitantes anuales. Muchos son los países que teniendo conflictos armados internos no superan esas cifras. Es el caso de Palestina, por ejemplo, que, sufriendo un gravísimo conflicto de ocupación, represión y violación de los derechos humanos por parte de Israel, dependiendo de qué años, no llega a esas cifras de muertes. En cambio, en su conjunto, en 2007, los países de Latinoamérica ofrecieron una tasa de 19,9 por cien mil habitantes, mientras la media mundial está en 8,8. A su vez, el continente contiene 50 ciudades entre las 100 más peligrosas del mundo, siendo Ciudad Juárez de México la ciudad con la tasa más elevada con un 229 por cien mil. Brasil ofrece también un panorama desolador: tiene 84 ciudades con una tasa que supera los 60 homicidios por cien mil. Honduras, con 84 homicidios por cien mil, muestra la tasa más elevada de la región.³ Esto demuestra que muchos son los países que, sin padecer ninguna guerra civil ni guerrillas internas que provoquen un número importante de muertes, tienen un tipo de conflictos internos de otra naturaleza a los considerados como de tipología política o de guerra clásica como lo es Colombia, pero que en cambio tienen unas tasas muy elevadas de muertes. Son los casos de Guatemala, El Salvador, Venezuela, Belice, Panamá, Honduras, Perú y México.

El sufrimiento que estos tipos de violencia acarrear a la población no está al margen del resto del mundo, especialmente del denominado *mundo civilizado* u *occidental*, sino que tienen que ver y dependen precisamente del sistema de vida *occidental*. Surgen del sistema económico capitalista y político liberal, el cual alimenta estos conflictos a través de las redes del comercio internacional, ya sean legales (monocultivos y extractivos) o ilegales (tráfico de drogas, armas y personas). Este razonamiento vale igualmente para los países africanos, asiáticos o americanos del centro y del sur, pues todos ellos viven bajo la nueva égida de la globalización capitalista que desestructura países y debilita los estados que se ven imposibilitados para proteger sus sistemas de vida sociales y hacer frente a las imposiciones exteriores de los *mercados*.

Por último, hay que advertir que este trabajo no realiza un estudio pormenorizado, país por país, de todos y cada uno de los conflictos derivados de esas

2. Altieri, Miguel 2008. *Small farms as a planetary ecological asset: Five key reasons why we should support the revitalization of small farms in the global south*. Food First, www.foodfirst.org/en/node/2115

3. Martínez Barahona, Elena 2009, *Seeking the Political role of the third government branch: a comparative approach to High Courts in Central America*. VDM Verlag Dr. Müller.

otras violencias, sino que una vez analizadas las causas, relata algunas de las más significativas, pero tampoco de todos los países, pues ello representaría detallar una exhaustiva información que desborda las pretensiones de este informe. Aunque eso sí, hemos escogido Brasil como ejemplo de país donde se dan todos los conflictos relacionados con las otras violencias.

2. SEGURIDAD Y VIOLENCIA EN LATINOAMÉRICA

Las políticas de integración regional en América Latina han tomado forma muy rápidamente en los últimos años, sobre todo en materia de cooperación socioeconómica y en el ámbito de la defensa y la seguridad. Esto se muestra en la celeridad con que se han desarrollado algunas organizaciones multilaterales en la región. Es el caso del Mercado Común del Sur (MERCOSUR), creado en 1991 y que cuenta con cuatro miembros plenos, seis asociados y otros observadores, como México; la Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas (CELAC), que cuenta ya con 33 miembros; la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), que se formó entre 2004 y 2005 para la cooperación e integración regional en varias materias; y el Consejo de Defensa Suramericano (CDS), constituido en 2009 por los doce miembros de Unasur para abordar cuestiones relativas a la seguridad.⁴ Este último organismo aún está en estado embrionario y el discurso de la seguridad común aún no está finalizado. Pero pese a ello, las reuniones del CDS son cada vez más frecuentes, y en su agenda figura el desarrollo de unos Planes de Acción anuales⁵ en los que cooperarán los Ministerios de Defensa de los diferentes países. Uno de los impulsos definitivos para la creación de una asociación como el CDS fue las tensiones entre Colombia y Venezuela y Ecuador en 2008, cuando una operación militar colombiana traspasó la frontera ecuatoriana para capturar miembros de las FARC. Este hecho evidenció la necesidad de contar con un organismo para abordar soluciones diplomáticas a posibles conflictos, así como contar con una mayor cooperación entre los países de la región en materia de seguridad. Ese mismo conflicto, por ejemplo, fue solucionado con la mediación, entre otros, de Néstor Kirchner, ex presidente de Argentina, cuando ejercía su función de primer Secretario General de Unasur, lo que demuestra la eficiencia diplomática inicial de las organizaciones regionales en construcción.

A pesar de que la mayoría de los centros de investigación internacionales más importantes consideran que en América del Sur el único conflicto armado activo es el de Colombia, en la mayoría del resto de países hay casos graves, frecuentes y sistemáticos de violencia armada que pueden ser clasificados como *conflicto armado* teniendo en consideración las tipificaciones más comunes del fenómeno.⁶ Así mismo, una gran parte de la violencia armada en América Latina parece no encuadrarse en definiciones convencionales, y por eso son frecuentemente olvidadas incluso por los análisis más rigurosos. Las democracias en esta región son relativamente recientes y aún están trabajando por pasar de democracias representativas –una real representatividad es cuestionada, ya que hubo un monopolio histórico del poder político por elites económicas– a una democracia institucional consolidada, con parámetros de estado de derecho, con separación real de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Es en este sentido que algunos analistas definen como *conflicto de transición* el hecho de que actores

El único conflicto armado activo es el de Colombia, en la mayoría del resto de países hay casos graves, frecuentes y sistemáticos de violencia armada que pueden ser clasificados como *conflicto armado*

4. Son miembros de Unasur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela.

5. Los planes de acción establecen la programación anual para las políticas de defensa, la cooperación militar, la industria y tecnología, y la formación y capacitación en materia de defensa. Fuente: <http://www.unasurcds.org/>

6. El Departamento de Investigación sobre Paz y Conflictos de la Universidad de Uppsala, por ejemplo, presupone que un mínimo de 25 muertes anuales causadas por la violencia directa entre grupos opositores ya configura un conflicto armado. También define como *active dyads* (algo como «pares activos») no estatales cuando la violencia entre grupos organizados causa un mínimo de 25 muertes anuales relacionadas con sus enfrentamientos, en un conflicto no estatal. <http://www.pcr.uu.se/research/ucdp/definitions/>

Hasta hace poco, casi la mitad de los ingresos totales en la región era retenida por las capas más ricas de la población

Esta enorme desigualdad ha inducido a hablar de la criminalización de la pobreza

Esa exclusión y desigualdad es también el resultado de los modelos de ajuste estructural neoliberales

La compra o arrendamiento (a veces con una duración de 100 años) de grandes extensiones de tierras agrícolas

militares, hasta muy recientemente, sigan teniendo un papel determinante en la desestabilización de unas democracias aún en construcción.⁷

Se deben verificar también los llamados *conflictos de desarrollo* de carácter estructural, fuertes tensiones causadas por una desigual distribución de la riqueza, el acceso a los recursos naturales y los logros del crecimiento económico que algunos países latinoamericanos vienen demostrando. Hasta hace poco, casi la mitad de los ingresos totales en la región era retenida por las capas más ricas de la población. Además, una cuarta parte de la población vive en la pobreza extrema, en su mayoría indígena, y en proporción muy alta en los países de mayor número de pueblos indígenas como Bolivia, Guatemala, Perú o Ecuador.⁸ Esta enorme desigualdad ha inducido a hablar de la *criminalización de la pobreza* a la vez que ha generado un reforzamiento de formas represivas paraestatales como, por ejemplo,⁹ la concentración del poder político en manos de la élite económica y la falta de oportunidad para que otros actores participen en la política, lo cual ha sido la realidad dominante durante toda la historia reciente de América Latina.

Esas tensiones también tienen un carácter étnico. Estudios del Banco Mundial indican que la correlación entre pobreza y etnicidad es un factor estructural, sobre todo en países como Guatemala, Bolivia, Perú, Brasil y Ecuador que, a excepción de Brasil, tienen población mayoritariamente indígena; su exclusión es a la vez social, política y económica.¹⁰

Esa exclusión y desigualdad es también el resultado de los modelos de ajuste estructural neoliberales, impuestos a partir de principios de los años 1980 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y que han estado activos hasta muy recientemente. En los años 1980, la región estuvo gravemente afectada por la crisis de la deuda externa, endeudamiento que se produjo durante los gobiernos de dictaduras y que estuvo ligado, en numerosos casos a la compra de armamentos. Para pagar esa deuda, esos gobiernos recurrieron a más préstamos, y las principales condiciones impuestas por el FMI son de sobras conocidas: los Planes de Ajuste Estructural, que fueron acompañados de la apertura de los mercados internos; la reducción de los gastos del estado principalmente en áreas sociales; la privatización de empresas estatales en muchos casos adquiridas por capital extranjero, y otras reformas estructurales de estabilización para la *corrección* de los déficits excesivos de los presupuestos públicos. Un ejemplo extremo fue el de Argentina que, en 2001, tras más de 20 años de un fuerte incremento de la deuda externa iniciado desde la instauración de la dictadura militar, anunció que suspendería el pago de la deuda para obligar a su negociación en unas condiciones más favorables.

Tensiones sociales que se profundizarán con la crisis alimentaria producida por el alza de los precios de los alimentos básicos, que a su vez es producto de la especulación en los mercados de los cereales, arroz, cacao y café. Esto ha inducido a países como Arabia Saudí y China y a fondos de inversión de entidades financieras o grandes multinacionales de la agroalimentación a la compra o arrendamiento (a veces con una duración de 100 años) de grandes extensiones de tierras agrícolas por todo el planeta. América Latina no ha escapado a esa especulación. Por ejemplo, en Brasil, el mayor productor agrícola del continente, ante la compra de tierras desde el exterior, el gobierno aprobó una normativa muy restrictiva que prohibía la enajenación de tierras; en Argentina, China tiene

7. del Álamo, Oscar 'América Latina: una región en Conflicto', en *Revista Futuros* (N. 10, vol. III, 2005), p. 2.
8. De acuerdo con datos y análisis del Banco Mundial. Ver: del Álamo, Óscar 'América Latina: una región en Conflicto', en *Revista Futuros* (N. 10, vol. III, 2005), p. 12.
9. Moreno, Luis Alberto, Presidente del BID: *América Latina y el Caribe seguirán creciendo pero enfrentan desafíos*, 14 Marzo 2012. Disponible en <<http://www.iadb.org/es/noticias/comunicados-de-prensa/2012-03-14/moreno-habla-acerca-de-la-asamblea-anual-en-montevideo,9846.html>>
10. del Álamo, Óscar 'América Latina: una región en Conflicto', en *Revista Futuros* (N. 10, vol. III, 2005), p. 12.

un proyecto para colonizar 320.000 hectáreas en la provincia de Río Negro; y el gobierno de Perú, en quince años ha subastado 235.000 hectáreas de tierras.

3. DESIGUALDAD SOCIAL

Si los altos niveles de desigualdad se extienden por toda Latinoamérica, en los casos de Bolivia, Guatemala y Perú la desigualdad social y la pobreza se intensifica en mayor grado entre la población indígena. A pesar de ello, hay que reconocer que algunos países han introducido normativas que han significado un avance en reducir la desigualdad. En Ecuador, la organización política de los indígenas ayudó a la llegada de Rafael Correa a la presidencia del país, quien a su vez garantizó espacios participativos para que los indígenas formaran parte del gobierno. Correa siempre abogó por la reducción de la influencia estadounidense en la región y por implementar políticas de justicia social. Algo similar ocurrió en Bolivia, donde un indígena, Evo Morales, líder del Movimiento al Socialismo, logró ser elegido presidente. En Perú y Brasil, los dos países con mayor crecimiento de la región según el propio FMI, y que vienen implementando importantes cambios socio-políticos hacia un sistema democrático más representativo de su población, también han introducido cambios: en Perú, Ollanta Humala fue elegido presidente en 2011, prometiendo una izquierda moderada; en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, presidente entre 2002 y 2010, fue sucedido por Dilma Rousseff (ambos del Partido de los Trabajadores – PT), que mantiene el mismo curso de políticas sociales y económicas basadas en la reducción de la pobreza y la inclusión social.¹¹ Fernando Lugo, en Paraguay (2008), llegó a la presidencia del país con un programa para reducir las desigualdades y hacer reformas agrarias, aunque después fue destituido en 2012, dejando en entredicho su programa –en lo que algunos de los países de la región llamaron *rito sumario de destitución*, que fue utilizado como argumento para la suspensión temporal de Paraguay del Mercosur y de Unasur hasta que tengan lugar las elecciones, en 2013.

Como dice el propio presidente ecuatoriano, Rafael Correa, la región pasa por un período de cambios sociales profundos y no de mera *gestión* del sistema liberal anterior; de salida de la fase, en palabras suyas, «del Consenso de Washington para el Consenso *sin* Washington.»¹² En 2009, Correa ya había ordenado a los EEUU que desocuparan una base militar que mantenían en Manta desde 1998, cuando el entonces presidente Jamil Mahuad les autorizó a usar la base para la lucha contra el narcotráfico.

Otras cuestiones de cambio en la región son anunciadas por agencias nacionales e internacionales, como la exclusión social en los centros urbanos. En Ecuador, el Centro Internacional de Gestión Urbana realizó un estudio a petición de la agencia HABITAT de la ONU, dedicada a las cuestiones de vivienda e inclusión social urbana.¹³ En él, tras el análisis de diez ciudades latinoamericanas,¹⁴ se confirmaba la persistencia de altos niveles de exclusión social derivados sobre todo de factores económicos y del crecimiento acelerado y desordenado de las ciudades, lo que crea extensas zonas marginadas que favorecen la aparición de delincuencia. Aún así, el estudio reconoce también una reducción gradual de los factores de exclusión, incluso los ligados a las situaciones históricas de marginación en que se hallan los indígenas y afro-descendientes. También el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su análisis sobre la *seguridad ciudadana*, reconoce resultados positivos en la reducción de la criminalidad en países como Colombia, Uruguay,

En los casos de Bolivia, Guatemala y Perú la desigualdad social y la pobreza se intensifica en mayor grado entre la población indígena

La región pasa por un período de cambios sociales profundos y no de mera gestión del sistema liberal anterior

11. Los dos son miembros del *Partido dos Trabalhadores* (partido obrero) e importantes actores en la lucha contra la dictadura, terminada en 1985.

12. Presidente Rafael Correa en entrevista a Julian Assange en la serie *The World Tomorrow*, 22 Mayo 2012. Disponible en <<http://www.youtube.com/watch?v=ZvUwC5JTAJY>>

13. Los resultados fueron publicados por UN-HABITAT en el *Informe sobre el estado actual de las ciudades en el mundo*, 2010.

14. São Paulo y Curitiba, en Brasil; Callao, en Perú; Oruro, Bolivia; Quito y Puertoviejo, en Ecuador; Porto Príncipe, en Haití; Cartago, en Costa Rica; y Bogotá, Colombia.

La falta de preocupación por el aspecto humano de la seguridad está entre una de las críticas principales a un plan notablemente fallido

Chile, Panamá, Jamaica y Brasil, y anuncia su apoyo a la exportación de esas experiencias a otros países de Latinoamérica. Un motivo principal es el hecho preocupante de que América Latina registra un 28% de todos los homicidios en el mundo.¹⁵

4. LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS

Los países de Latinoamérica se posicionan cada vez más a favor de una solución multilateral y regional para combatir el cultivo, la producción y el tráfico de drogas. En 2012, la 'VI Cumbre de las Américas' fue marcada por las declaraciones de los presidentes Juan Manuel Santos, de Colombia, y Otto Pérez Molina, de Guatemala, dos países amigos de EEUU, en que condenaban las políticas –en esencia notablemente militaristas– guiadas hasta entonces por EEUU. El Plan Colombia, por ejemplo, puesto en marcha en el Gobierno de Andrés Pastrana y profundizado considerablemente por el de Álvaro Uribe, es hoy motivo de fuertes críticas tanto a escala regional como internacional.

El Plan fue concebido como un esfuerzo por la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, y tenía como uno de los principales blancos el combate contra los grupos guerrilleros de las FARC y el ELN. Plan que contó con una financiación de miles de millones de dólares desde los EEUU y un despliegue militar considerable, como el envío de 12.000 soldados de fuerzas militares a cuatro departamentos distintos de Colombia. La falta de preocupación por el aspecto humano de la *seguridad* está entre una de las críticas principales a un plan notablemente fallido.¹⁶ Asimismo, la respuesta del presidente estadounidense Barack Obama,¹⁷ en la Cumbre, fue ofrecer 130 millones de dólares a países centro-americanos –Honduras, El Salvador y Guatemala– para «apoyar la estrategia regional de seguridad».

El éxito, aunque relativo, de las políticas que combaten el narcotráfico en Colombia, se puede observar en referencia a las hectáreas cultivadas de hoja de coca así como las toneladas de producción. En los últimos diez años, mientras el cultivo ha disminuido en un 57%, la producción se ha reducido en un porcentaje menor, un 33,8%, lo cual demuestra una mayor capacidad de introducir mejoras de productividad en su cultivo (Tablas 1 y 2). Por otro lado, no hay que olvidar que el cultivo y producción de la coca, sigue siendo, aun hoy, la principal fuente de ingresos del PIB del país y por lo tanto, muy ligada a los intereses de una parte de la oligarquía colombiana; el propio ex presidente Álvaro Uribe ha sido relacionado con el negocio de la coca.

El narcotráfico también está presente en Perú. En el año 2012, Perú ha estado a punto de superar a Colombia en la producción de coca. Por otro lado, en Perú como en Colombia, durante la última década se intensificó considerablemente la *guerra contra las drogas*, al mismo tiempo en que se creó, paralelamente como en Colombia, el fenómeno de la corrupción gubernamental, a veces ligada al comercio de las drogas. Pero a pesar de una aparente política gubernamental de persecución, en la práctica, ha crecido el cultivo de la hoja de coca hasta alcanzar un aumento del 72% en la producción en los últimos diez años. Esto, en parte, puede ser debido tanto a la tradición muy arraigada entre la población de su cultivo para otros fines que no la producción de droga, que comparte con su vecino Bolivia, como a la reactivación del grupo armado Sendero Luminoso que ha buscado en el cultivo una forma de financiar sus actividades.

El cultivo y producción de la coca, sigue siendo, aun hoy, la principal fuente de ingresos del PIB del país

15. Luis Alberto Moreno, Presidente del BID: *BID fomentará modelos exitosos de seguridad ciudadana*, 19 Marzo 2012. Consult. 01 Junio 2012. <<http://www.iadb.org/es/reunion-anual/2012/noticias-de-la-reunion-anual,6405.html?amArticleID=9878>>

16. Ortega, Pere, Gómez, Juan Sebastián (2010), *Militarismo en América Latina*, Quaderns per a la Solidaritat nº 39, Barcelona, Centre d'Estudis per la Pau JM. Delàs de Justicia i Pau

17. Fuente: Organización *Stop the Drug War*. http://stopthedrugwar.org/chronicle/2012/apr/15/obama_addresses_drug_legalizatio

Bolivia es diferente, puesto que el cultivo de la hoja de coca es para consumo interno y por ello no está perseguido

Este grupo, aunque muy reducido respecto al pasado, sigue en activo. Sus principales dirigentes fueron capturados a finales de los años 90, pero recientes informes indican que se ha reactivado produciéndose enfrentamientos armados entre el grupo y fuerzas gubernamentales. Tanto es así que, a principios de 2012, las encuestas oficiales corroboraron que la reanudación de su actividad había hecho caer el índice de aprobación del actual presidente Ollanta Humala debido a la incapacidad de las fuerzas oficiales para combatirlo. Además, existe la sospecha de que Sendero Luminoso esté utilizando a niños como soldados. El grupo se refugia en zonas agrestes de difícil acceso, de producción cocalera, y se le supone ligado al tráfico de la coca; ha practicado el secuestro, entre otros, de 36 trabajadores de empresas petroleras (liberados en abril de 2012), por lo que el gobierno envió a 1.500 soldados a la región cercana a Cuzco.

El caso de Bolivia es diferente, puesto que el cultivo de la hoja de coca es para consumo interno y por ello no está perseguido, pues no está relacionado con la producción de la cocaína. En ese sentido, forman parte de los derechos culturales de los campesinos, otorgados por el gobierno de Evo Morales. Aunque el aumento de la demanda externa de la droga, las altas tasas de pobreza y la dificultad en el control de las fronteras favorecen el crecimiento de producción de la cocaína.

El resto de los países donde existe mucha violencia ligada al narcotráfico y fuertes enfrentamientos entre el crimen organizado y el estado, como es el caso de México y Brasil, es tratado de forma más pormenorizada en los análisis de estos dos países.

El negocio de la droga, no se debe olvidar, tiene un reparto muy desigual en sus ganancias, mientras el agricultor que lo cultiva percibe un precio medio aproximado de 1.000 \$ por Kg. de la hoja de coca. Los traficantes que lo comercializan en Estados Unidos, que es donde se consume, perciben un precio que alcanza los 180.000 \$ el Kg. Esta es una de las cuestiones más frecuentemente citadas en América Latina para recordar al *mundo desarrollado* su parte de responsabilidad en el narcotráfico, cuya producción, comercio y consumo no es territorial sino internacional.

Tabla 1. Total del Cultivo de Plantas de Coca por miles de hectáreas entre 2001-2010

País	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	Var. 2001-10
Colombia	144.800	102.000	86.000	80.000	86.000	78.000	99.000	81.000	73.000	62.000	-57%
Perú	46.200	46.700	44.200	50.300	48.200	51.400	53.700	56.100	59.900	61.200	32%
Bolivia	19.900	21.600	23.600	27.700	25.400	27.500	28.900	30.500	30.900	31.000	56%
Total	210.900	170.300	153.800	158.000	159.600	156.900	181.600	167.600	163.800	154.200	-27%

Fuente: World Report on Drugs 2012, UNODC (Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen)

Tabla 2. Total de producción de cocaína (toneladas) en América Latina entre 1999-2009

País	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009*	Var. 1999-08
Colombia	680	695	617	580	550	680	680	660	630	450	410	-33,8
Perú	175	141	150	160	230	270	260	280	290	302		72,6
Bolivia	70	43	60	60	79	98	80	94	104	113		61,4
Total	925	879	827	800	859	1.048	1.020	1.034	1.024	865		-6,5

Fuente: World Report on Drugs 2012, UNODC (Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Crimen)

Datos de fuentes oficiales o gubernamentales latinoamericanas y agencias antinarcóticos estadounidenses

En Colombia hay una progresiva disminución de la producción como lo demuestran los datos de 2009, pero el cálculo se mantiene hasta 2008 por falta de datos de Perú y Bolivia

Casos de malos tratos, tortura, ejecuciones y sobrepoblación son los más recurrentes en los informes sobre la violación de los derechos humanos en las cárceles

5. LA VIOLENCIA CARCELARIA

Un gran número de organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncia constantemente las condiciones de gran precariedad en la que la población carcelaria subsiste en muchas cárceles de Latinoamérica. Aunque los EEUU sean los primeros en el ranking de población encarcelada en el mundo, los números en esta región son elevados, con especial atención en El Salvador, Chile, Brasil y México, de acuerdo con la Tabla 3. Casos de malos tratos, tortura, ejecuciones y sobrepoblación son los más recurrentes en los informes sobre la violación de los derechos humanos en las cárceles, como los de Amnistía Internacional, *Human Rights Watch* y también de las Secretarías especiales de los Gobiernos, las ONGs u otras investigaciones.¹⁸

Otra cuestión de calado es el asunto de las políticas de reinserción social y acceso a la justicia por parte de los encarcelados, que da pie a la crítica del sistema carcelario y punitivo de muchos países en los que las alternativas al encarcelamiento siguen discutiéndose. La ONU y las organizaciones regionales establecen debates y publican informes constantemente para la evaluación de la justicia penal, sobre todo teniendo en cuenta el perfil predominante de los encarcelados: negros, hombres, jóvenes y pobres, lo que mantiene un ciclo de exclusión social y marginación.¹⁹ Pero la falta de seguridad y de preparación profesional de los funcionarios de prisiones dentro de las cárceles intensifica la violencia sufrida por los presos, así como también las agresiones a celadores y policías: son frecuentes las rebeliones y los casos de confrontación de bandas con ataques a agentes y funcionarios de prisiones.

Lidiar con los temas relacionados con el sistema penitenciario incluye evaluar también el sistema judicial y las políticas sociales de reinserción y prevención de las situaciones delictivas. Pero en cambio, persiste en la mayoría de los casos soluciones simplistas e insostenibles como la construcción de más cárceles, por ejemplo, para responder a la sobrepoblación en las mismas. El aumento de la población carcelaria es una constante en casi todos los casos; en Brasil, de 2003 a 2008 ha crecido un 37%, y en México, un 13%. En el primer caso, la sobrepoblación era de un 80% en 2008 y, en el segundo, de un 33%, porcentaje cercano al argentino.²⁰

Así mismo, también existen algunos ejemplos positivos de políticas sociales y de justicia implementados en algunos países: en Ecuador, a través del plan 'Transformación penitenciaria: hacia una verdadera reinserción social' del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; en Venezuela, donde el Ministerio de Interior y Justicia profundizó en la inclusión de sistemas de salud y educación en las cárceles; en Brasil, donde existen comisiones de asistencia jurídica dentro de las cárceles y la 'Política Nacional de Penas y Medidas Alternativas'. Son algunos de los ejemplos de nuevos enfoques más socialmente sostenibles dentro del sistema de penas en Latinoamérica.

La falta de seguridad y de preparación profesional de los funcionarios de prisiones dentro de las cárceles intensifica la violencia sufrida por los presos

18. En Brasil, por ejemplo, el doctor Drauzio Varella publicó el libro *Carandiru*, sobre la condición de la salud y otros temas en la prisión Carandiru de São Paulo. El libro también fue adaptado al cine en 2003.

19. Lucía Dammert y Liza Zúñiga, *La Cárcel: Problemas y desafíos para las Américas* (Chile: FLACSO, 2008). Consult. 06 Junio 2012. <http://issuu.com/flacso.chile/docs/rss_2008_4>

20. *Idem*, 43.

Tabla 3. Población carcelaria (comparación)

País	Personas encarceladas (año 1) ¹	Proporción por 100.000 hab.	Personas encarceladas (año 2) ²	Proporción por 100.000 hab.
Argentina ³	60.621 (2006)	154	59.227 (2010)	146
Bolivia	7.682 (2006)	82	8.700 (2010)	87
Brasil	440.013 (2008)	227	496.251 (2010)	253
Chile	51.244 (2008)	305	52.563 (2011)	305
Ecuador	17.065 (2008)	126	11.800 (2010)	86
El Salvador	14.682 (2007)	208	24.283 (2010)	391
México	222.671 (2008)	207	222.330 (2010)	200
Peru	41.745 (2008)	146	47.164 (2011)	159
Venezuela ⁴	22.000 (2008)	79	43.461 (2010)	149

Hay alguna irregularidad en la periodicidad de los informes, por eso los años varían

1. International Centre for Prison Studies, King's College (Eight Edition), con base en los datos de la Administraciones Nacionales de Prisión

2. International Centre for Prison Studies, King's College (Ninth Edition)

3. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina

4. Observatorio Venezolano de Prisiones

6. CONFLICTOS SOCIO-AMBIENTALES Y CULTURALES

La creciente confrontación entre mundo rural e industrial se ha convertido en Latinoamérica en una de las principales causas de conflictos y de violencia contra las personas. Los conflictos derivados de la expansión de la agricultura intensiva, el monocultivo de caña de azúcar y palma para agrocombustibles; la soja y maíz transgénico para piensos de la ganadería intensiva y la alimentación humana (revolución verde), atentan contra la soberanía alimentaria secular de los campesinos que habitan en América Latina. De igual manera, la minería extractiva, la industria maderera y ganadera son igualmente lesivas para las comunidades campesinas que, indígenas o no, habitan en el mundo rural y zonas más selváticas latinoamericanas. A continuación, se señalan algunos de los conflictos más significativos, no todos, pues no hay país en Latinoamérica que se libere de los conflictos medioambientales que afectan a la población campesina.

El golpe de estado en Honduras (2009) no debe deslindarse de la sobreexplotación que ejercen las grandes transnacionales que extraen recursos de sus tierras. Por ejemplo, se descubrió que la población estaba siendo engañada por el gobierno, que enmascaraba los perjuicios causados por las empresas mineras. Vía Campesina reveló que la Agencia Católica para el Desarrollo de Ultramar, del Reino Unido, había llevado a cabo una investigación que revelaba la contaminación de aguas causada por la empresa Entremares, propiedad de la minera canadiense Goldcorp.

En Costa Rica, la población sufre por las desocupaciones forzadas y la destrucción de bosques para dar espacio al monocultivo del ananá. Los campesinos que se resisten al desalojo de las tierras de interés para las empresas productoras, son obligados a firmar un contrato en el que se comprometen a continuar plantando y vendiendo el ananá a las empresas. El uso de abonos químicos y pesticidas en este monocultivo contamina los acuíferos produciendo graves perjuicios a la salud de los habitantes.

En Panamá, una de las luchas campesinas más importantes es la llevada a cabo contra la empresa minera Petaquilla Gold, que con su trabajo destruyó regiones de manglar en el distrito de Denoso, causando la muerte de numerosas especies,

La creciente confrontación entre mundo rural e industrial se ha convertido en Latinoamérica en una de las principales causas de conflictos y de violencia contra las personas

El golpe de estado en Honduras (2009) no debe deslindarse de la sobreexplotación que ejercen las grandes transnacionales que extraen recursos de sus tierras

Las transnacionales españolas también tienen responsabilidades en la contaminación medioambiental

Impunidad de la que son responsables las autoridades públicas por su complicidad en la contaminación

Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político y difícilmente ocurre al revés

perjudicando la pesca. Empresa a la que se acusa de la persecución y asesinato de algunos líderes comunitarios.

En El Salvador, la población está enfrentándose a la minera Pacific Rim, responsable de graves daños al territorio. Actualmente, la movilización se centra en impedir que las actividades de la transnacional contaminen la cuenca del río Lempa, que abastece de agua a casi a la mitad de la población. El Estado ha negado el permiso para la explotación, pero Pacific Rim interpuso una demanda de indemnización al gobierno en el Centro de Resolución de Conflictos de Inversiones (Ciadi) por un importe de 120 millones de dólares bajo el argumento de «expropiación de ganancias».

Las transnacionales españolas también tienen responsabilidades en la contaminación medioambiental. Son los casos de Abengoa en agroalimentación; Pescanova, mediante la pesca intensiva y el uso de insecticidas en las piscifactorías de camarones en manglares que afecta gravemente a la fauna; Campofrío, en ganadería intensiva; ENDESA, en Chile, donde tiene previsto la construcción de presas hidroeléctricas sobre los ríos Baker, Pascua y tiene otra ya construida en Ralco en el río Bio Bio con un grave impacto medioambiental que afecta a las comunidades de campesinos e indígenas; o el caso similar de la petrolera española Repsol presente en Brasil, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y Chile, líder en toda la región en extracción de hidrocarburos, en Arauca, Colombia, ha desarrollado su actividad extractiva en territorios de comunidades indígenas y ha sido acusada por Amnistía Internacional de financiar unidades militares para proteger sus instalaciones.²¹ Otra empresa española, Unión Fenosa, en 2002, en Costa Rica, construyó una planta hidroeléctrica en la Joya que afectó a las aguas nacientes subterráneas que se secaron, fuentes de donde se abastecían seis comunidades; y en el suroeste de Colombia, EPSA (filial de Unión Fenosa) ocasionó graves deterioros ambientales afectando a numerosas comunidades de campesinos.

6.1. Argentina

Argentina es, quizás, el país de Sudamérica donde se perpetran los mayores delitos medioambientales, y también, el que concentra las mayores movilizaciones en contra de esos delitos. Las agresiones al medio ambiente se reparten en partes iguales entre explotaciones mineras y la impunidad frente a la ley de la contaminación de otras industrias como papeleras, incineradoras, plantas de residuos, frigoríficas. También el uso intensivo de productos químicos en la agricultura de monocultivos cítricos y soja forma parte de estas agresiones. Es una impunidad de la que son responsables las autoridades públicas por su complicidad en la contaminación, ya que es de dominio público que, detrás de cada delito ambiental, no hay desidia, ni distracción, sino un funcionario corrupto.

Existe una presión política que procede de los ámbitos gubernamentales del Estado cuando se investigan los delitos ambientales. En pocas ocasiones son los propios gobernantes los que se convierten en querellantes contra las empresas extractivas. Sucede que el poder económico tiene la capacidad de comprar al poder político y difícilmente ocurre al revés, por eso es mucho más difícil investigarlo y lograr condenas. El poder económico puede comprar con mucha facilidad al poder judicial, o puede presionar al poder político para las designaciones en el poder judicial. Muchos jueces de primera instancia son suplentes, designados a dedo por el oficialismo. Eso impide que no se tenga una administración de Justicia realmente independiente.

La llegada al gobierno de Néstor Kirchner en 2003 produjo un cambio de rumbo en las políticas sociales del país dirigidas a combatir la desocupación, de apoyo al cooperativismo y de ayudas sociales que le granjearon el apoyo de la gran

21. Amnistía Internacional, «Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca», Madrid, 2004

mayoría de la población. Pero ello no acalló las luchas de los movimientos de resistencia a las agresiones ambientales de las industrias extractivas y del monocultivo de la soja transgénica, que fueron creciendo durante su mandato y de su sucesora, su viuda, Cristina Kirchner. Movimientos que se agruparon en la Unión de Asambleas Ciudadanas (UAC), que junto a otros movimientos campesinos se oponen a la tala de bosques y la contaminación ambiental que afecta a la agricultura orgánica de los campesinos.

Veamos algunos ejemplos. En Andalgalá, en la provincia de Catamarca, se está llevando a cabo un megaproyecto minero para extracción y producción de cobre y oro que explota la empresa Bajo La Alumbra y que ha levantado furiosas protestas de los campesinos debido al uso de cianuro con vertidos al río que afectará gravemente a la salud de la población. Otro caso similar es el ocurrido en Abra Pampa, en la provincia de Jujuy, donde una mina de plata y plomo, cercana a la ciudad, cerró la explotación en 1985, dejando miles de toneladas de escorias abandonadas que contenían plomo. Mientras tanto, la empresa Xstrata Copper, que explotaba el yacimiento, negaba que usara cianuro en la producción y que existiera contaminación, mientras las autoridades locales y regionales callaban. Los análisis entre la población revelaban que un 80% de la población infantil tenían dosis elevadas de plomo en la sangre y que un 10% de los adultos tenían perturbaciones de salud. Esto fue corroborado por una investigación de científicos independientes que certificaron la existencia de plomo y otras sustancias como mercurio y ácido sulfúrico entre los residuos abandonados.

Una de las escasas denuncias de un responsable político procedió del gobernador Alperovich de Tucumán, quien interpuso una demanda por contaminación. El procesamiento por contaminación contra La Alumbra dictado por la Cámara Federal de Tucumán, en 2008, acabó con un fallo valiente y puso en crisis todo el sistema de minería a cielo abierto. Y se realizó basándose en una comunidad que presionó a los jueces por los daños físicos provocados por la contaminación, muerte de animales, plomo en la sangre y un alto índice de enfermedades cancerígenas, además de la falta de agua en los valles donde se cultiva. Lo peor llegó después: la Cámara de Casación Penal dictó un fallo anulando la sentencia anterior.

La Patagonia es la región más amenazada por decenas de proyectos extractivos. Hay proyectos uraníferos, como en la cuenca del río Chubut, que amenazan sus aguas y comprometen seriamente el futuro del río. De todas las minerías la del uranio es la más peligrosa debido a que el 70% de la radioactividad original queda en las coladas mineras, y las partículas de gas radón que desprende, que es radioactivo, pueden viajar a cientos de kilómetros de distancia. Otro proyecto, el Navidad, en la meseta centro norte, pretende volar miles de toneladas de roca diaria para extraer plata y plomo a cielo abierto, y tratarlas en la planta de procesamiento utilizando millones de litros de agua y productos químicos tóxicos, que pueden afectar al acuífero de la comarca de Sacanana. En otra demarcación patagónica, en Río Negro, se derogó la ley que prohibía la utilización de cianuro en los procesos mineros.

La española Repsol, mediante su filial YPF –hasta su nacionalización por el gobierno de Cristina Kirchner en mayo 2012– también está denunciada por múltiples derrames tóxicos y contaminación atmosférica en la Patagonia; ha extraído gas y petróleo en el territorio mapuche de Loma de la Lata, donde tiene una refinería y está acusada de contaminación del agua con materiales pesados.

Estos casos dieron pie a que en marzo de 2012 se realizara una gran marcha de 400 km entre las ciudades de Trelew y Esquel a través de la meseta patagónica para protestar por el impacto de la megaminería y sus consecuencias sobre ríos y acuíferos que son de vital importancia para los ecosistemas y población. La marcha reunió, además de los vecinos, a artistas e intelectuales en defensa de la ley 5001, la cual prohíbe la minería metalífera a cielo abierto y la utilización de cianuro.

De todas las minerías la del uranio es la más peligrosa debido a que el 70% de la radioactividad original queda en las coladas mineras

La española Repsol, mediante su filial YPF también está denunciada por múltiples derrames tóxicos y contaminación atmosférica en la Patagonia

En Bolivia, los Derechos Indígenas han pasado a formar parte de la Ley de la República, lo cual obliga a proteger a estos pueblos y sus territorios

6.2. Bolivia

En Bolivia, los Derechos Indígenas han pasado a formar parte de la Ley de la República, lo cual obliga a proteger a estos pueblos y sus territorios, por ejemplo, de las actividades de la industria extractiva (explotación del gas, petróleo, madera y minerales). Hasta la elección de un indígena como presidente, Evo Morales, esos derechos nunca habían sido debidamente reconocidos. Las *guerras del gas*, que tuvieron lugar en el país desde los inicios del siglo XXI, fueron protagonizadas por movimientos sociales que planteaban demandas respecto a la gestión de los recursos naturales. Estos enfrentamientos, que tenían entre sus líderes a Evo Morales, acabaron con la presidencia de Sánchez de Losada, que huyó del país y llevaron a Morales a la presidencia. A Morales le tocó el trabajo de recuperar y nacionalizar las industrias extractivas en manos de empresas extranjeras y abogar por los derechos indígenas. Estos pueblos definen sus luchas tanto por cuestiones territoriales, de exclusión social y económica, como por el derecho a la soberanía alimentaria incluido el cultivo de la hoja de coca, también por cuestiones culturales, reivindicando el respeto y la protección de sus tradiciones. Estos movimientos, bajo el mandato de Morales, persisten y continúan enfrentándose al gobierno cuando éste aplica políticas que amenazan los derechos territoriales de las comunidades.

Los conflictos por los recursos, más allá del conflicto por la tierra, abarcan también los recursos hídricos, como ocurrió en Cochabamba, donde la privatización del agua causó grandes tensiones sociales. Entre 1999 y 2000, el Banco Mundial había presionado al presidente de entonces, el general Hugo Banzer, para privatizar el sistema de agua, pero los *cocaleros*, liderados por Evo Morales, en coordinación con otros movimientos sociales regionales, lograron expulsar de la ciudad a la principal empresa del consorcio, la estadounidense *Bechtel*, cuyo contrato fue cancelado.²² El caso sólo se solucionó en 2006, cuando la empresa, bajo presión de las protestas ciudadanas, desistió de procesar al Gobierno de Bolivia.

6.3. Ecuador

En Ecuador, la situación no es muy diferente de Bolivia. Fue el gobierno de Rafael Correa quien, por primera vez, incorporó en la Constitución los derechos de la naturaleza.²³ De esta manera Ecuador preservaba sus zonas amazónicas de la ganadería, la agricultura intensiva con pesticidas y transgénicos, pero muy especialmente de la actividad extractiva que había generado severos conflictos con la comunidad indígena, a la que a su vez se protegía mediante el derecho de la Pacha Mama (naturaleza o madre tierra). Este cambio de orientación de la política se producía con un gobierno de izquierdas muy sensible a los graves problemas medioambientales del país y por los continuos conflictos y ataques que en el pasado se habían producido contra la población indígena. Uno de los conflictos de mayor repercusión fue el que se produjo en la provincia amazónica de Pastaza, donde la extensión de zonas de explotación de petróleo por el consorcio *Arco Oriente* provocó la protesta de pueblos indígenas locales.

Tras la apertura al capital extranjero, sobre todo en los años 80, y la consecuente intensificación de la explotación extranjera de los recursos madereros y del subsuelo, diversos movimientos indígenas comenzaron fuertes protestas contra la ocupación de sus tierras, ocasionando varios episodios violentos en un conflicto socio-ambiental que se extendió a otras regiones amazónicas, entre Ecuador,

El gobierno de Rafael Correa quien, por primera vez, incorporó en la Constitución los derechos de la naturaleza

22. Amy Goodman, '*Cochabamba, la guerra del agua y el cambio climático*', en *Democracy Now!* (20 de Abril de 2010). Consult. 01 Junio 2012. <http://www.democracynow.org/es/blog/2010/4/22/Cochabamba_la_guerra_del_agua_y_el_cambio_climático>

23. El artículo 71 de la constitución ecuatoriana señala «La naturaleza o Pacha Mama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos...» y el artículo 73 «El Estado aplicará medidas de precaución y restricción para las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, la destrucción de ecosistemas o la alteración permanente de ciclos naturales...»

Alan García justificó la expulsión de decenas de miles indígenas para favorecer empresas mineras

Bolivia, Perú, y Brasil, y en menor medida a Colombia, Venezuela, Chile y Paraguay. En estas regiones amazónicas se produjo un alto nivel de violencia cuando las empresas madereras ilegales se enfrentaron a los pueblos indígenas locales. Violencia que además estaba relacionada con cuestiones estructurales de identidad cultural, de autonomía y de jurisprudencia que se concretaban en demandas de cambios legislativos para los indígenas.²⁴ Es importante mencionar, por ejemplo, el proyecto ambiental Yasuní ITT, que supuso un compromiso de no explotar los yacimientos de petróleo encontrados en esa región de la Amazonia ecuatoriana y que la española Repsol, con financiación del banco BBVA, pretende explotar.

6.4. Perú

Perú, como el resto de los países amazónicos, también tiene conflictos en las zonas rurales, disputas ligadas a la posesión de tierras cultivables, por conflictos ambientales derivados de las industrias extractivas o por cuestiones de los derechos indígenas a sus territorios. En Bagua, en 2009, el entonces presidente Alan García justificó la expulsión de decenas de miles indígenas para favorecer empresas mineras con el argumento de que no podían negar el derecho al desarrollo de los 28 millones de peruanos. O el caso del departamento de Cajamarca, en la sierra norte del Perú, donde un proyecto minero con una inversión valorada en 5.000 millones de \$ para la extracción de oro y cobre a cielo abierto enfrenta a la población local (unas 40.000 personas) con la multinacional Newmont (EEUU) y la peruana Yanacocha. El proyecto pone en peligro todo el sistema hídrico de la comarca, pues para la extracción y lavado del oro se utiliza cianuro y otras sustancias nocivas que contaminan las aguas y amenaza la economía agrícola y ganadera de esta zona. En las luchas y protestas que llevaron a cabo los habitantes de Cajamarca, en julio de 2012, el ejército peruano disparó contra los manifestantes causando 5 muertos.

Otro caso de contaminación ambiental se produjo en Camisea, en la Amazonía meridional, donde Pluspetrol, controlada por la española Repsol, llevó a cabo la construcción de un gran complejo petroquímico para la extracción de gas natural que contamina las aguas fluviales y afecta a la población indígena que, por voluntad propia, vivían aislados en la zona. El presidente Humala, que había prometido proteger los derechos medioambientales de la población frente a la industria extractiva, ahora tiene que dirimir entre sus promesas electorales o los dividendos que arrojarán para las arcas públicas peruanas la extracción minera.

6.5. Brasil

6.5.1. Conflictos rurales

Las zonas rurales tampoco están exentas de violencia en Brasil, pero de otro signo. Aquí se trata del dominio de la tierra para llevar a cabo su explotación industrial. La tala del bosque amazónico para la venta de madera en mercados internacionales, para la explotación ganadera o del monocultivo para combustibles, o de industrias extractivas de hidrocarburos, oro u otros minerales está provocando, en los últimos años, una mayor confrontación entre el mundo rural y el industrial, debido a una creciente toma de conciencia de los derechos de los habitantes en la región afectada. Esto se ha traducido en un aumento de la persecución de líderes de pueblos indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas que investigan estas actividades, misioneros y otros miembros de grupos específicos, con altas tasas de asesinatos, de las que se responsabiliza a terratenientes, o mejor, *grileiros* –individuos que falsifican documentos para apropiarse irregularmente de tierras ya pertenecientes a otros– y paramilitares a su mando –o *pistoleiros*– involucrados en conflictos por la tierra y en conflictos ambientales.

Un aumento de la persecución de líderes de pueblos indígenas, ambientalistas, campesinos, periodistas que investigan estas actividades

24. El Banco Interamericano para el Desarrollo mantiene una importante base de datos de leyes relacionadas a la cuestión indígena, que puede ser consultada por países: <<http://www.iadb.org/Research/legislacionindigena/leyn/index.cfm?lang=es>>

Millones de kilómetros cuadrados han sido declarados y homologados oficialmente como *tierra indígena*

La lógica de expansión de las producciones industriales de soja, caña de azúcar, palma y maíz y de la actividad relacionada con la ganadería hacia la Amazonia y a los *planaltos*, en el centro del país, es también fuente de grandes tensiones con los campesinos locales y con comunidades indígenas. También están involucrados en conflictos por actividades extractivas los mineros *garimpeiros*, que llevan a cabo de forma ilegal la explotación de oro u otros minerales a cielo abierto, utilizando mercurio y otras sustancias altamente nocivas para la salud de las comunidades que habitan la Amazonía. Este tipo de actividades mineras ha producido numerosos enfrentamientos y muertos. En agosto de 2012, en la selva amazónica de Venezuela, en Parima, cerca de la frontera con Brasil, una comunidad indígena yanomami que acusaba a los *garimpeiros* brasileños de contaminar sus aguas por la explotación ilegal de dos minas de oro, fue atacada, produciéndose decenas de muertos. Casos similares han ocurrido en repetidas ocasiones en Guayana Francesa, también con frontera amazónica con Brasil.

6.5.2. Conflictos y movimientos indígenas

Las demarcaciones de tierras indígenas aún son cuestiones problemáticas en Brasil, a pesar de los avances positivos hechos desde 2003 hasta hoy, cuando millones de kilómetros cuadrados han sido declarados y homologados oficialmente como *tierra indígena*. Eso representa actualmente un 13% del territorio brasileño, distribuido en 673 tierras indígenas para 238 pueblos.²⁵ Las homologaciones han sido hechas a partir de estudios antropológicos y con base a varias leyes federales para la regularización, tanto de tierras tradicionalmente ocupadas por pueblos indígenas como para la atribución a ellos de otras tierras. La demarcación de las tierras es apenas un esfuerzo inicial en la garantía de los derechos indígenas al reconocimiento de su territorio.

Las condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad en que viven muchos pueblos indígenas son frecuentemente expuestas y criticadas por diversas organizaciones nacionales e internacionales. Entre estos, los pueblos Xavante y Bororo, de la región de Araguaia (en el Estado de Mato-Grosso, principalmente), sufren de altas tasas de mortalidad infantil y enfermedades de fácil cura, pero frecuentemente fatales. Aún más visible todavía es la violencia de los conflictos por la posesión de tierras, sobre todo en zonas de explotación forestal, minera y para la apropiación privada en general. El Gobierno Federal cuenta con algunas instituciones para la protección de los derechos indígenas como la Fundación Nacional de los Indígenas (FUNAI), pero aún tiene dificultades para llegar a estos pueblos, sobre todo por la falta de estructuras y por la insuficiente habilidad profesional y comprensión de la problemática por parte de muchos de los mediadores y técnicos dedicados a estas funciones.

Otro ejemplo de las confrontaciones entre poblaciones indígenas y no-indígenas fue el caso ocurrido en *Marãiwatsédé*, en el Centro-Oeste brasileño (Estado de Mato-Grosso), dónde en 1960 se instaló la hacienda Agropecuaria Suiá-Missú, una extensión de 165 mil hectáreas. El Tribunal del estado de Mato-Grosso determinó la retirada de familias de no-indígenas de forma voluntaria, pero fue necesario destacar fuerzas policiales y de seguridad nacional para contener la resistencia de los campesinos. Como antecedente en la historia de Brasil, los indígenas de la región, como los Xavantes, habían sido forzados a desplazarse a otras regiones, de acuerdo con los intereses del gobierno –sobre todo en la época de la dictadura militar, de 1964 hasta 1980. La tierra había sido vendida a una petrolera italiana, Agip, que fue presionada a devolverlas a los indígenas en la conferencia ambiental Rio92. En 1998, la tierra fue homologada como Tierra Indígena, pero hasta una etapa reciente, por conflictos con las familias que también se instalaron en ella, los indígenas ocupaban apenas un 10% de las

Las condiciones de pobreza extrema y vulnerabilidad en que viven muchos pueblos indígenas son frecuentemente expuestas y criticadas por diversas organizaciones

25. Datos del Instituto Socioambiental, de Brasil: <http://ti.socioambiental.org/>.

tierras a que tienen derecho.²⁶ En el estado vecino, Mato-Grosso do Sul, en la región fronteriza con Paraguay, también el pueblo Guarani-Kaiowá lucha por recuperar sus tierras ancestrales, así reconocidas por la justicia. Son frecuentes los enfrentamientos con dueños de haciendas irregulares y los indígenas que intentan recuperar su territorio, denominado *Arroio-Korá*, homologado por el Gobierno Federal en 2009. En 2012, los terratenientes ilegales han amenazado con iniciar una *guerra* contra los indígenas que intenten recuperar ese territorio, con lo que varios órganos federales –como la Secretaría de Derechos Humanos, la Policía Federal, el Ministerio de Justicia y otros– están trabajando para impedir los enfrentamientos, e intentado restituir esas tierras a los indígenas.²⁷

6.5.3. Más conflictos por la tierra

Los movimientos campesinos que luchan por conseguir tierras de cultivo gozan de gran representatividad en Brasil, y se extienden también por toda la región en Sudamérica, sobre todo el movimiento integrado en Vía Campesina, el Movimiento de los trabajadores rurales Sin Tierra (MST), por ejemplo, que reivindican la reforma agraria, el asentamiento de miles de familias acampadas en las *estradas* del país y la desapropiación de tierras improductivas, además de la reducción del uso de fertilizantes e insumos tóxicos en las plantaciones; también demandan el fin del monopolio de las industrias extranjeras proveedoras de esos fertilizantes o de simientes genéticamente modificadas por las industrias extranjeras, como Syngenta, Bunge, Monsanto y otras, mayoritariamente de origen estadounidense. Es frecuente la violencia armada contra estos movimientos, grupos de indígenas o familias aisladas. Según la *Comissão Pastoral da Terra* (CPT), hasta 2011, 1.614 personas habían muerto en 25 años, lo que supone una media de más de 60 asesinatos anuales por cuestiones relacionadas con el conflicto de ocupación de tierras o los derechos de la población indígena a sus tierras ancestrales.

6.5.4. Conflictos ambientales

Líderes ambientalistas, sobre todo en la región Norte de Brasil, en estados como Pará, Rondônia y otros, siguen sufriendo persecuciones, amenazas o siendo víctimas de asesinatos. El Ministerio Público Federal reconoce y toma medidas de protección, a través de la Policía Federal, para los habitantes locales que denuncian explotaciones ilegales de madera y abogan por la protección de las reservas forestales, pero son frecuentes aún los informes sobre la violencia armada entre grupos distintos en la región. Según la CPT, en la última década casi 400 personas murieron por cuestiones relacionadas con el conflicto del campo, sobre todo por hacer denuncias de deforestación y asentamiento ilegal de ganaderos y madereras, y muchas siguen denunciando frecuentes amenazas.

6.5.5. Conflictos urbanos

En Brasil, además, existe una violencia ligada al crimen organizado que opera en los núcleos urbanos de las grandes ciudades. En Rio de Janeiro, el *Comando Vermelho*, originalmente formado para luchar por los derechos de los encarcelados, el *Terceiro Comando* y los *Amigos dos Amigos* son grupos armados con dominio territorial en las favelas que se aprovechan de la baja participación del estado como regulador y garantizador de la seguridad y de los derechos humanos. En favelas y otros territorios pobres y segregados de la región metropolitana se establecieron en los años 1970 y 80, a través de una *reciprocidad forzada* con los habitantes locales, «sustituyendo los derechos por favores y las obligaciones por relaciones de complicidad forzada».²⁸ Grupos de policías corruptos también par-

**En Brasil, además, existe una
violencia ligada al crimen
organizado que opera en
los núcleos urbanos de las
grandes ciudades**

26. Fórum de Direitos Humanos. <http://direitoshumanosmt.blogspot.com.br/2012/08/justica-determina-saida-imediata-de.html>

27. Fórum de Direitos Humanos. http://direitoshumanosmt.blogspot.com.br/2012/08/indigenas-guarani-kaiowa-sao-ameacados_27.html

28. Justiça Global, *Segurança, Tráfico e Milícias no Rio de Janeiro*. Rio de Janeiro: Fundação Heinrich Böll, 2008, p.17.

Las llamadas *milicias* –paramilitares no estatales– prometen seguridad a los habitantes de los barrios con mayor conflictividad

ticipan habitualmente en el *cobro* de favores y reciben parte de los rendimientos de negocios ilícitos y del tráfico de drogas y armas, involucrándose directamente en la economía política del crimen, que asume una característica transnacional por sus implicaciones exteriores en toda Latinoamérica.

Las llamadas *milicias* –paramilitares no estatales– prometen seguridad a los habitantes de los barrios con mayor conflictividad, después de haberse llevado a cabo operativos *invasiones* de tipo militar en barrios dominados por las bandas que controlan el tráfico interno de la droga. Son *milicias* que muchas veces actúan en cooperación con miembros de la policía. Actualmente este tipo de situaciones es combatido por el Gobierno con las llamadas UPP, Unidades de Policía Pacificadora. Unidades basadas en la idea de *policía comunitaria* que persiguen una aproximación entre la comunidad y las fuerzas de seguridad a través de la apertura de centros cívicos de acogida donde se llevan a cabo servicios sociales.²⁹

Sao Paulo es la mayor ciudad de América del Sur, con casi 11 millones de habitantes, o 19 millones si se considera su región metropolitana. Aquí es donde nació, a principios de los años 1990, el grupo *Primeiro Comando da Capital* (PCC), principalmente para la lucha por los derechos de los encarcelados. Actualmente ya se encuentra representado también en otros estados brasileños y tiene más de 100.000 integrantes. El grupo se sostiene a través del tráfico de armas y drogas también transnacional; está considerado como la mayor *facción criminal* del país. En 2001, organizó la mayor rebelión carcelaria del mundo, en 30 prisiones, apenas superada por una siguiente rebelión, en 2006, que paralizó más de 70 prisiones sólo en el Estado de Sao Paulo.

En mayo de este año 2012, la ciudad sufrió sorprendentes ataques armados durante cuatro días, tiempo en que la ciudad estuvo paralizada. Se contabilizaron más de 300 ataques, especialmente contra estaciones policiales y bancos privados; 48 personas, entre policías y ciudadanos, murieron a manos del PCC, y las fuerzas policiales acabaron con 304 miembros del grupo. Dos meses después, los ataques se repitieron y llegaron a más de 800 en la región metropolitana, con un saldo de 9 policías y 102 integrantes del PCC muertos. Según informe del *Departamento de Investigações sobre o Crime Organizado* (Departamento de Investigaciones sobre el Crimen Organizado), los ataques habían sido provocados por el secuestro por policías de un familiar del líder del PCC. La corrupción policial es uno de los aspectos estructurales que el sistema de seguridad federal combate actualmente.

La posesión de armas en manos de civiles es una de las causas de la alta tasa de homicidios. Debido a ello el gobierno lleva a cabo frecuentes campañas de desarme, recogiendo un importante número de armas pequeñas y ligeras. En 2005, el Gobierno realizó un referéndum para la prohibición de la comercialización de las armas de fuego, previsto en el Estatuto del Desarme, ley de 2003. Pero la mayor parte de la población, aún preocupada por los altos índices de violencia– y con la percepción de un *derecho a auto-defensa*– decidió votar por no prohibirla. La recogida de armas prosigue y la Campaña Nacional de Desarme de 2009 logró destruir más de 40.000 armas y cerca de 31.000 en 2011.³⁰

7. COLOMBIA

Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en 2012, Colombia ocupaba el sexto lugar entre los países del mundo de donde más personas huían de la presión de militares y paramilitares: las cifras llegan a casi 400.000 refugiados, mientras que el número de personas internamente des-

29. Secretaria de Seguridad del Estado de Río de Janeiro; página de las UPP. http://upprj.com/wp/?page_id=20

30. Campanha Nacional do Desarmamento. <http://www.entreguesuaarma.gov.br/>

La posesión de armas en manos de civiles es una de las causas de la alta tasa de homicidios

Las guerras sucias o limpias, según sea quien juzgue, han dejado 300.000 muertos en Colombia

plazadas llega a 3,8 millones.³¹ La causa principal es la violencia y el conflicto que azota Colombia desde hace décadas, y cuyos actores principales son las guerrillas de las FARC, del ELN, los paramilitares, los narcotraficantes y las fuerzas armadas del Estado Colombiano. Desde los inicios de los conflictos armados de las guerrillas en 1958, hasta fecha de hoy, 2012, las guerras sucias o limpias, según sea quien juzgue, han dejado 300.000 muertos en Colombia. También según ACNUR, cerca de 2.000 indígenas, de 26 grupos étnicos diferentes, han sido obligados entre 2002 y 2007 a huir hacia la amazonía del estado brasileño.

La dificultad de controlar las fronteras situadas en zonas selváticas es un importante factor que favorece que los grupos armados sigan evadiendo a las autoridades. Las Comisiones Bifronterizas (Combifron) nacionales tienen un escaso papel en la cooperación para la seguridad y en asuntos militares.³² Después de la incursión colombiana en Ecuador en 2007, en una operación donde resultó muerto Raúl Reyes, importante dirigente de las FARC, las Combifron entre los dos países se congelaron, aunque se volvieron a restablecer a finales de 2009.

Todavía, los procesos de desmovilización de los 40 grupos paramilitares, integrantes de la coalición Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), clasificados de exitosos por el gobierno de Álvaro Uribe, presidente hasta 2010, son cuestionados por gran parte de la población colombiana y también por organizaciones de derechos humanos internacionales, como la *Human Rights Watch* (HRW). Según un informe de HRW de 2010, parte de los grupos desmovilizados de las AUC han vuelto a la actividad o han sido reemplazados por otros grupos, 4.000, según la Policía Nacional de Colombia, o 10.000 miembros activos, según algunas organizaciones no gubernamentales.

8. GUATEMALA

Guatemala, así como la mayor parte de los países de América del Sur y Central, fue escenario de una dictadura militar extremadamente violenta, con un doloroso balance: más de 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos entre 1987 y 1996. El conflicto armado finalizó pero, según la Misión de Verificación de Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), en un informe de mayo de 2002, el ejército guatemalteco mantenía un control territorial y sobre la población similar a los tiempos de la lucha contrainsurgente de la época del gobierno del dictador general Efraín Ríos Montt,³³ y los gastos militares sobrepasaban el límite del porcentaje del PIB establecido en los Acuerdos de Paz.³⁴

MINUGUA medió entre el Gobierno y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG) para establecer más de 20 acuerdos y planes en los que se incluían la resolución política del conflicto, la defensa de los derechos humanos, la incorporación de la URNG a la legalidad, reformas constitucionales y electorales, aspectos socioeconómicos, agrarios, la identidad y los derechos de los pueblos indígenas, la reconciliación, el establecimiento de comisiones de la verdad para averiguar los hechos durante el conflicto y el fortalecimiento del poder civil y función del ejército en el marco democrático.

Guatemala fue escenario de una dictadura militar extremadamente violenta, con un doloroso balance: más de 150.000 muertos y 45.000 desaparecidos

31. UNHCR Statistical Yearbook 2012. <http://www.unhcr.org/4ef9c7849.html>

32. Camilo Echandía Castilla, Eduardo Bechara Gómez y Irene Cabrera Nossa, 'Colombia: Estado del Conflicto Armado', in *Seguridad Regional en América Latina y Caribe – Anuario 2010*, (eds.) Hans Mathieu y Catalina Niño Guarnizo (Bogotá: Programa de Cooperación en Seguridad Regional Friedrich Eberto Stiftung, Octubre de 2010).

33. Carlos Figueroa Ibarra, 'Militarización, crimen y poder invisible en Guatemala: el retorno del centauro', en ed. José Seoane, *Movimientos Sociales y conflictos en Latinoamérica* (Buenos Aires: Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO, 2003).

34. MINUGUA, *Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una sociedad democrática*. México, 19 de septiembre de 1996. <<http://www.guatemalaun.org/bin/documents/Acuerdo%20fortalecimiento%20poder%20civil%20y%20funci%C3%B3n%20del%20ej%C3%A9rcito.pdf>>

Las maras (bandas urbanas) y las pandillas juegan un papel importante, muchas veces aliadas a autoridades corruptas

Por otro lado, en 2012, diversos analistas siguen denunciando un abuso del poder por parte de las fuerzas armadas, también acusadas de corrupción, así como una presencia insuficiente del estado en términos de justicia, considerada inoperante, lo cual favorece la impunidad. También denuncian elevados niveles de violencia en el campo y en los centros urbanos, relacionada con altos niveles de pobreza y desigualdad social, en los que las *maras* (bandas urbanas) y las pandillas juegan un papel importante, muchas veces aliadas a autoridades corruptas. Según los mismos analistas, este tipo de criminalidad y la ausencia de una legitimidad estatal como fuerza que dé seguridad a la población lleva a que algunos grupos decidan hacer *justicia* con sus propios medios, lo cual favorece los altos índices de criminalidad y de impunidad existentes.

En Guatemala, la lucha contra varias empresas que, con el apoyo de las autoridades gubernamentales, utilizan indebidamente los bienes naturales y violan los derechos humanos de comunidades enteras. Como ejemplos pueden ser citadas las luchas contra la mina Marlín, en Sipacapa, San Marcos; y contra la empresa de caña Chabil Utzaj, ubicada en Valle del Polochic, territorio Queqchi de donde fueron retiradas cerca de 800 familias en marzo de 2011.

9. MÉXICO

En Chiapas, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), que se presentó oficialmente en 1994, es un movimiento de defensa de la tierra, por el reconocimiento de los derechos de las culturas indígenas, por la autonomía de la región, por el derecho a la tierra, el autogobierno y el *altermundismo* –enfrentamiento a la globalización neoliberal–. Durante los periodos sin negociaciones entre el EZLN y el Estado Mexicano, hubo muchos enfrentamientos con grupos paramilitares, posiblemente apoyados por las Fuerzas Armadas del Estado. Tal fue el caso de la matanza de Acteal, en 1997, donde un grupo de paramilitares asesinó a 45 campesinos. El EZLN abandonó la lucha armada pero no se desmovilizó: mantuvo sus armas y la posibilidad de recurrir a ellas en última instancia. Así mismo, mantiene aún un gran prestigio y legitimidad entre la población local, lo que es novedoso en la tipificación respecto de otros grupos armados que no gozaron de apoyo entre los campesinos.

En los estados de Guerrero y Oaxaca, surgieron el Ejército Popular Revolucionario (EPR) y Ejército Popular Revolucionario Insurgente (EPRI), también combatidos por las Fuerzas Armadas y el Gobierno Federal Mexicano.

Los tres grupos son los únicos en México que cuentan con armas, efectivos, organización y estructura jerárquica, programa de lucha y que han hecho uso de la violencia armada. Esto motivó una gran concentración de tropas y efectivos militares en los territorios en que estos grupos actuaron. Lugares en que también se encuentran numerosos grupos paramilitares que los combaten. Además, en el Centro de Documentación de los Movimientos Armados de ciudad de México, se encuentran referenciados otros grupos que siguen publicando comunicados en la actualidad, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Pueblo, de Guerrero, entre otros.³⁵

En los últimos años ha aparecido una violencia delictiva mucho más mortífera que la de grupos de carácter político. Es la violencia ligada a las actividades de grupos de narcotráfico, que ha ido aumentando en el transcurso del tiempo. Esto es debido al gran negocio que mueve la coca, en el que cada vez compiten más grupos por su control y participación en la producción, tráfico y consumo. Hablamos tanto de grupos de narcos como de paramilitares o de los propios cuerpos de seguridad, aparato judicial, ejército, funcionarios y políticos. Si se observan

En los últimos años ha aparecido una violencia delictiva mucho más mortífera que la de grupos de carácter político

35. Centro de Documentación de Movimientos Armados: <http://www.cedema.org/index.php?ver=mostrar&pais=9&nombrepais=Mexico>

las tasas de homicidios en todo México, estas han pasado de 9,6 por cien mil habitantes en 2007, a 18,2 en 2010, y 24,37 en 2011. Este aumento exponencial de homicidios se produjo de forma abrupta a partir de la llegada a la presidencia de Felipe Calderón en 2006, quien seis meses después de ser elegido declaró la *guerra* al narcotráfico. En seis años, a pesar de no existir censos oficiales fiables, fuentes de los movimientos de resistencia a la impunidad de esta *guerra* que sufre la población calculan en 80.000 los muertos y en 6.000 los desaparecidos. La impunidad alcanza todos los ámbitos gubernamentales del estado. Entre el año 2000 y 2012, 126 periodistas han sido asesinados, de los que el gobierno tan solo reconoce a 41 y solo un caso ha sido resuelto por la justicia, y han sido 172 los periodistas que han sufrido agresiones graves. Son los activistas y los trabajadores de los medios de comunicación quienes se atreven a movilizarse e informar de esta *guerra sucia* y a su vez, son los colectivos que más persecuciones, torturas y asesinatos sufren. En el último sexenio, 71 activistas contra la impunidad han sido asesinados.³⁶

Estados Unidos no está al margen de la responsabilidad de esta *guerra*. En primer lugar, porque la demanda proviene de EEUU, que es donde se comercializa y donde se encuentra la mayor proporción del negocio. Dinero del narcotráfico, que a su vez retorna a México para ser blanqueado en los bancos mexicanos; y en segundo lugar, porque la mayoría de las armas –unas 2.000 armas cruzan la frontera mexicana a diario– que provocan tanta violencia provienen de EEUU (un 90% de las armas incautadas son de fabricación norteamericana); un comercio de armas que deja réditos muy lucrativos para los traficantes de EEUU que las introducen en México de manera ilegal. Una cercanía que se percibe como amenaza, y que en el pasado hizo exclamar al presidente Porfirio Díaz (1830/1915) «Pobre México, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos».

Unas redes de narcotráfico que ha adquirido enormes extensiones, se especula que un tercio del total de tierras agrícolas, para el cultivo de marihuana y opio, y que superan en número el cultivo de maíz y que ocupan a 3 de los 25 millones de agricultores mexicanos.³⁷

Por otro lado, también existe una constante influencia de los EEUU en las políticas de seguridad mexicanas. Conviene recordar que cerca del 10% de la población mexicana vive en los EEUU.³⁸ El problema les afecta directamente, debido a los 3.000 km de fronteras. Son alrededor de diez los principales cárteles que controlan el tráfico de la cocaína y de inmigrantes en la frontera mexicana, entre otros, La Familia en Ciudad Juárez, Sinaloa y Los Zetas en Tijuana. Todos hacen ostentación de su gran poderío de armas de fuego y de los altísimos números de asesinatos ligados a las actividades del narcotráfico, la extorsión y el tráfico de personas inmigrantes. Ello ha empujado a EEUU a través de su agencia D.E.A. a implementar acciones militares conjuntas.³⁹

En Ciudad Juárez, la ciudad de toda Latinoamérica con la tasa más alta de homicidios (29,08 por cien mil habitantes), es a su vez donde el fenómeno del *feminicidio* tiene mayor arraigo. Un fenómeno ligado al narcotráfico, la emigración y la prostitución, es decir, al tráfico de mujeres. Mujeres, en muchas ocasiones emigrantes, que son obligadas a ejercer la prostitución o a pasar droga. De ahí el continuo secuestro, tortura, violación y asesinato de mujeres. Es una práctica habitual de la impunidad con que bandas de uno u otro signo actúan y ame-

Esta guerra que sufre la población calculan en 80.000 los muertos y en 6.000 los desaparecidos

La mayoría de las armas –unas 2.000 armas cruzan la frontera mexicana a diario– que provocan tanta violencia provienen de EEUU

Ciudad Juárez, la ciudad de toda Latinoamérica con la tasa más alta de homicidios

36. <http://www.nuestraaparenterendición.com> Esta organización mexicana acoge una extensa red de activistas que tanto desde el interior de México como desde otros países lleva a cabo un trabajo de resistencia contra la impunidad. En su web se contabiliza el número de desaparecidos y homicidios con nombre y apellidos.

37. World Drug Report 2011 de Naciones Unidas, www.unodc.org

38. Migration Information Source: <http://www.migrationinformation.org/Profiles/display.cfm?ID=772>

39. Presidencia de la República de México, *Anuncio sobre la Operación Militar Conjunta en Michoacán*, 11 de diciembre de 2006. Disponible en: <http://www.presidencia.gob.mx/2006/12/anuncio-sobre-la-operacion-conjunta-michoacan/>

El tráfico de personas se ha convertido también en un negocio del que participan bandas criminales

drentan a la población de Ciudad Juárez, pero también de otras ciudades de toda la línea fronteriza con EEUU, con el ánimo de acrecentar y demostrar su poder frente a la población y las diferentes instancias del gobierno.

El movimiento migratorio tiene sus causas en la pobreza y la desigualdad de los países de Latinoamérica. La diáspora afecta especialmente a México seguida de emigrantes de Centroamérica, el Caribe y Sudamérica, 15.000 al año, que se desplazan hacia *el dorado* del norte. El tráfico de personas se ha convertido también en un *negocio* del que participan bandas criminales, que actúan, en ocasiones, en conexión con los aparatos policiales. Un negocio que corre paralelo y ligado al del narcotráfico. Una frontera de 3.185 Km difícil de controlar a pesar de los muros y barreras físicas construidas desde 1994 por EEUU. En 2006, el Congreso estadounidense votó el *Secure Fence Act*, para la construcción de 1125 kilómetros de barreras.⁴⁰ Eso no ha impedido la migración, que se lleva a cabo por vías más peligrosas, lo que ha incrementado el número de muertes y, además, ha favorecido a las redes criminales de tráfico de personas que exigen mayores compensaciones a los emigrantes que intentan su paso a EEUU.

Naciones Unidas considera que existe una epidemia cuando el número de muertes (homicidios) es más de 10 por cien mil habitantes

10. VENEZUELA

Según un informe del Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), en 2011, el país obtuvo las cifras más altas en homicidios de toda su historia superando la cifra registrada de 19.336, o sea, una tasa de 60 asesinatos por cada cien mil habitantes (fuentes oficiales reconocen una tasa de 48 por cada cien mil habitantes). El informe recuerda que Naciones Unidas considera que existe una epidemia cuando el número de muertes (homicidios) es más de 10 por cien mil habitantes.⁴¹ Según el informe, eso se debe sobre todo a la impunidad generalizada para acabar con la delincuencia. La percepción de la población sobre la violencia que se desprende de una encuesta oficial fue la siguiente: un 46% de los entrevistados de 1.000 familias cree tener derecho a matar para defender su propiedad y un 45% apoya a la actividad punitiva extrajudicial de la policía.

Gráfico 1: Tasa de homicidios de Venezuela (1990-2010)



40. *The U.S. Congress votes Database*: <http://projects.washingtonpost.com/congress/109/house/2/votes/446/>

41. Observatorio Venezolano de Violencia, *Informe Homicidios 2011*: <http://www.observatoriodeviolencia.org.ve/site/noticias/74-informe-homicidios-2011.html>

Las autoridades venezolanas han promovido planes para el desarme así como depuraciones de los cuerpos policiales infiltrados por el crimen. Según el propio gobierno, de un 15% a un 20% de los delitos son cometidos por policías.⁴² Y según el Anuario de Seguridad Regional de 2011, hubo una creciente *militarización de la sociedad*, que ha llevado a los cuerpos militares a ocupar espacios de la autoridad civil.⁴³

Así mismo, hay que tener en cuenta que muchos de los esfuerzos programáticos y las políticas de seguridad han llevado a que en algunos países de la región la eficiencia de la policía y de la justicia en las investigaciones contra el crimen hayan sacado a la luz más casos de violencia. Así, el aumento de las tasas de homicidios quizás no sea exclusivamente debido a un aumento real de la violencia, sino a que la investigación e intervención de la justicia ha provocado un incremento en las estadísticas de homicidios.

Por otro lado, como parte de un plan nacional para reducir las tasas de homicidios, el gobierno prohíbe la comercialización e importación de todo tipo de armas de fuego y municiones desde junio de 2012, en un intento de desarmar a la población civil. También se cerraron 80 tiendas de armas de las más de 3.000 contabilizadas en 1998 existentes en el país. Entre 2003 y 2012 se han destruido unas 2.700 armas de fuego en posesión de bandas criminales, según fuentes del Viceministerio de Seguridad Ciudadana.

Dentro del marco de la defensa regional y de las relaciones bilaterales, Venezuela reanudó sus relaciones con Colombia tras los conflictos y acusaciones mutuas de apoyo a las guerrillas que operaban desde territorio venezolano, o de invasión por parte de las fuerzas colombianas. Con la elección de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, el presidente Hugo Chávez y él reanudaron las relaciones entre los dos países, congeladas desde 2008 cuando Colombia, bajo el gobierno de Álvaro Uribe, invadió a Ecuador en una operación para la captura de miembros de las FARC, la cual terminó con la muerte del líder Raúl Reyes. El proceso de acercamiento entre los dos países contó con el establecimiento de grupos de trabajo para la cooperación, incluso para tratar de uno de los problemas más graves entre los dos países: el control fronterizo.

Las relaciones con Estados Unidos son bastante difíciles y a principios de 2011, se mantenían a un nivel mínimo, debido, en parte, al discurso marcadamente nacionalista y antiimperialista del presidente Chávez, y a su esfuerzo por establecer una Comunidad de Naciones Latinoamericanas y Caribeñas (CELAC) que excluiría a los EEUU y a Canadá de la región. Para contrarrestar, la cooperación militar de los EEUU con muchos países de la región (Plan Colombia, Plan Mérida e Iniciativa Puebla-Panamá), se asignan fondos que están muy por encima que los destinados a proyectos de ayuda al desarrollo.⁴⁴

11. INDICADORES DE VIOLENCIA

La conflictividad señalada en los apartados anteriores, ya sea por cuestiones estructurales de desigualdad social, cultural o económica, por cuestiones medioambientales o derivadas de la delincuencia del tráfico de drogas y de personas, se traduce en una alta tasa de homicidios. Estos homicidios se muestran en la Tabla 4 en porcentajes de muertes por cien mil habitantes. Los datos provienen de fuentes oficiales, lo cual está sujeto a deficiencias. Una, que solo se cuentan las muertes registradas como homicidios cuando éstas son dictaminadas por

42. Encuesta del OVV, citada en: <http://informe21.com/actualidad/homicidios-siguen-ascenso-venezuela-cada-vez-mas-violenta>

43. Francine Jácome, 'Venezuela 2010: Entre los desafíos de la seguridad regional y la seguridad ciudadana', en *Anuario 2011 de Seguridad Regional en América Latina y el Caribe* (Bogotá: Friedrich Ebert Stiftung, 2011), 175-176.

44. *Idem*, 180.

Según el propio gobierno, de un 15% a un 20% de los delitos son cometidos por policías

Dentro del marco de la defensa regional y de las relaciones bilaterales, Venezuela reanudó sus relaciones con Colombia

Los registros evidencian las violencias estructurales existentes en Latinoamérica

médicos forenses. Sin embargo, éstos actúan con facilidad en zonas urbanas, mientras que en el ámbito rural y en especial en el selvático el acceso es mucho más difícil, con lo que muchos homicidios se escapan de las estadísticas. Tampoco se tienen en cuenta las numerosas desapariciones que no se engloban como muerte hasta la aparición del cadáver de la víctima. Con lo cual la Tabla 4 solo es una muestra aproximativa de la magnitud del problema, y las tasas de muertes por violencia armada bien podrían ser superiores.

Todos los indicadores son objeto de insuficiencias pues existen multitud de variables que a veces no son tenidas en cuenta y que podrían modificar los resultados finales y en ese sentido deben ser tomados con cierta precaución; a pesar de ello, los indicadores siempre nos ofrecen pistas para entender la situación de las poblaciones y sus estados. Así, en la Tabla 5, se ofrecen unos registros que evidencian las violencias estructurales existentes en Latinoamérica y provocadoras de inestabilidad y conflictos, a la vez que dan una visión de la violencia física y la inseguridad interna que sufre la población de los estados de la región. A continuación se describen los diferentes indicadores:

- Índice de Paz Global, que mide la paz utilizando indicadores de militarismo mezclados con indicadores de desarrollo.
- Índice de Percepción de Corrupción, que mide la corrupción interna de los estados, tanto de las empresas privadas como de las instituciones públicas.

Tabla 4. Tasas de homicidios

País	Homicidios (2007)	Proporción por 100.000 hab. ¹¹	Homicidios (2010)	Proporción por 100.000 hab. ¹¹
Argentina ¹	2.071	5,2	2.237	5,4
Bolivia ²	1.013	9,7	1.084	9,3
Brasil ³	38.716	16,6	40.974	22,2
Chile ⁴	616	1,9	1.054	1,3
Ecuador ⁵	2.273	17,0	2.638	19,0
El Salvador ⁶	3.495	57,3	4.308	64,4
Guatemala ⁷	5.885	43,9	5.960	41,5
Honduras ¹¹				84,0
México ⁸	10.253	9,6	20.585	18,2
Perú ⁹	2.943	10,3	2.709	10,2
Venezuela ¹⁰	13.156	47,6	13.080	45,1

Datos de la Organización de Estados Americanos, extraídos de fuentes nacionales

1. Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Argentina
2. Comando General de la Policía Boliviana
3. Secretaría Nacional de Seguridad Pública, Brasil
4. Instituto Nacional de Estadísticas y Policía de Investigaciones de Chile
5. Departamento de Policía de Ecuador
6. Policía Nacional Civil de El Salvador
7. Policía de Guatemala, Departamento de Estadísticas Vitales
8. Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
9. Policía Nacional de Perú
10. Departamento de Policía de Venezuela
11. Red Iberoamericana de análisis de datos de delincuencia

- Índice de los Derechos Humanos, que mide las violaciones de los derechos humanos al interior de los países.
- Índice de Conflictos Armados, que indica los conflictos armados existentes, duración y muertos.
- Desplazados Internos, que mide en función de los conflictos existentes los desplazamientos internos de la población.
- Nivel de Impunidad, que mide el nivel de impunidad con que actúan delincuentes, bandas y mafias de delincuencia organizada.

Haití, el país más pobre de toda Latinoamérica, que ofrece unos índices lastimosos que evidencian una enorme violencia estructural

Estos indicadores, por sí solos, son suficientemente explícitos como para no extenderse en explicaciones. Aunque, en algún caso, sí debe mencionarse la alarma que produce observar que algún estado tiene pésimos índices en casi todos los *rankings*. Tal es el caso de Haití, el país más pobre de toda Latinoamérica, que ofrece unos índices lastimosos que evidencian una enorme violencia estructural. Le sigue en segundo lugar Colombia, un país con un conflicto armado interno y con millones de desplazados que lo sitúan con el peor índice de paz interna de la región. También tiene un alto índice de violaciones de derechos humanos

Tabla 5. Indicadores diversos de América Latina

País	Índice Global de Paz Ranquing /149 ¹	Índice Percepción de Corrupción ²	Índice de DDHH (INDH) ³	Conflictos Armados 2001- 2011 ⁴	Desplazados Internos ⁵	Nivel de Impunidad ⁶
América del Sur						
Argentina	55	3,0	1,21			
Bolivia	76	2,8	2,17			3
Brasil	74	3,8	3,07			2
Chile	38	7,2	1,08			1
Colombia	139	3,4	5,75	1960-2011 ⁷	3,88 a 5,45 millones	3
Ecuador	90	2,7	1,81	2003 ⁸		2
Paraguay	66	2,2	0,72			
Perú	85	3,4	2,71		150.000 ¹⁰	3
Uruguay	21	7,0	0,72			
Venezuela	124	1,9	3,07			2
América Central						
Costa Rica	31	4,8				
Cuba	67	4,2	3,75			1
El Salvador	102	3,4	1,03			3
Guatemala	125	2,7	3,01		indeterminado ¹¹	3
Haití	113	1,8	4,16			3
Honduras	117	2,6	3,07			2
Jamaica	106	3,3	1,69			3
México	121	3,0	4,82	2002-2011 ⁹	160.000 ¹²	3
Nicaragua	72	2,5	1,75			
Panamá	49	3,3				
Rep. Dominicana	91	2,6	1,03			

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos de varias fuentes

1. Global Peace Index 2011, Institute for Economics and Peace. 1 mínima, 149 máxima

2. Corruption Perception Index (CPI) 2011, Transparency International. 0 máxima, 10 mínima

3. Informe Alerta 2011 (datos sobre 2010): Conflictos, derechos humanos y construcción de la paz, Escola de Cultura de Pau

4. Uppsala Conflict Data Program, Uppsala Universitet (One-sided violence, Armed conflict, Non-state conflict)

5. Internal Displacement Monitoring Centre

6. Informe Alerta 2011 (datos sobre 2010): Conflictos, derechos humanos y construcción de la paz, Escola de Cultura de Pau. 1 esporádico, 3 sistemático

7. Colombia: Conflicto armado, de violencia estatal y de grupo armado no estatal

8. Ecuador: Conflicto entre grupos indígenas Huaorani-Tagari debido a la fragmentación (al menos 26 muertos)

9. Conflicto entre mafias de narcotráfico (Juarez cartel-Sinaloa cartel, Sinaloa cartel-Gulf cartel, Tijuana cartel-El Teo)

10. Conflicto entre el Estado y los grupos de Sendero Luminoso y Tupac Amaro 1980-2000 (causó entonces 1 millón de desplazados)

11. Las Naciones Unidas estimaron en 242.000 en 1997, pero el Gobierno aún no ha definido los criterios para su definición

12. Suma de desplazados por la insurrección Zapatista de 1994 y por la violencia relacionada con los carteles de droga

Estos índices han sido fuertemente criticados por ofrecer una visión eurocéntrica basada en valores occidentales

Hay que tener muy en cuenta que la inseguridad que sufren estos países es producto de la globalización capitalista. Una globalización que impone unas relaciones comerciales, financieras y políticas por parte de los países desarrollados

La demanda cada vez más generalizada del ejemplarizante *Sumak kawsay* (bien vivir) y de vivir en paz con la *Pacha Mama* (naturaleza)

Las diversas comunidades indígenas, sigan coordinando sus luchas y presentando demandas ante los organismos regionales e internacionales competentes

y de impunidad, signo de su incapacidad para dar seguridad e impartir justicia a su población. México, también es un país que ofrece índices muy negativos, y que año tras año escala puestos en los puestos de impunidad, violaciones de derechos humanos y homicidios.

En el sentido contrario, los países que ofrecen mayores tasas de seguridad a su población son, en primer lugar, Uruguay y en segundo, Argentina. Ambos tienen puestos destacados en protección de derechos, justicia e índices poco negativos en violencia interna y militarismo medidos por el Índice Global de Paz.

Por otro lado, algunos de estos índices han sido fuertemente criticados por ofrecer una visión eurocéntrica basada en valores occidentales respecto a cómo debe medirse el *Estado de Derecho* en los países del Sur. Uno de ellos, el de Estados Fallidos, descartado por nosotros, está dedicado a medir la capacidad que tienen los gobiernos para dar seguridad a su población, y que ciertamente, en algunos de los países analizados es manifiestamente insuficiente. Pero pese a ello, hay que tener muy en cuenta que la inseguridad que sufren estos países es producto de la globalización capitalista y de cómo esta influye en el orden, o mejor dicho, desorden interno. Es decir, una globalización que impone unas relaciones comerciales, financieras y políticas por parte de los países desarrollados y de los organismos internacionales que estos gobiernan (OMC, FMI y Banco Mundial...) respecto a los países del Sur. Esto ha llevado a que se haya acuñado el concepto de *Paz Liberal* (Mark Duffield, John Paul Lederach y Oliver Richmond entre otros), que cuestionan por insuficiente la política aplicada por los países industrializados del Norte, que impone valores e ideales para una *construcción de la paz o peacebuilding*, basada en implementar un *Estado de Derecho* a imagen de los estados con democracia liberal, con fórmulas políticas a veces ajenas a las culturas de los países del Sur, y además, sin tener en cuenta la participación de las poblaciones locales.

12. CONCLUSIONES

Lo expuesto hasta aquí revela la existencia de diversas violencias, la mayoría de ellas debidas a una distribución desigual de la riqueza y, por lo tanto, ligadas a cuestiones estructurales. Para empezar a poner remedio a esa desigualdad, los gobiernos deberían poner en marcha o profundizar sus políticas de desarrollo para satisfacer los *derechos económicos, sociales y culturales* de la población, más conocidos como DESC. Es una propuesta que va ganando adeptos y haciendo camino en las demandas de los movimientos sociales campesinos e indígenas latinoamericanos. Los DESC, que traducidos al lenguaje común se sintetizan en la demanda cada vez más generalizada del ejemplarizante *Sumak kawsay* (bien vivir) y de vivir en paz con la *Pacha Mama* (naturaleza), también han sido expuestos en las tesis de la Ecopolítica, que por cierto cada día tiene más seguidores en América Latina, así como el concepto de *neo-desarrollo*, propuesto por Brasil y otros países del Sur, dedicados a la llamada Cooperación Sur-Sur. Un entendimiento y armonía entre gobiernos y movimientos sociales que no siempre es fácil de compaginar, pues Latinoamérica es rica en recursos fósiles y materias primas no renovables sobre las que ejerce una fuerte presión la demanda de los países industrializados.

Debido a ello, los países de la región están cada vez más asediados por transnacionales que, en su búsqueda de lucro, contaminan y desalojan a la población con el desarrollo de proyectos mineros, hidroeléctricos, ganadería, pesca y monocultivos intensivos. Para impedir estas iniciativas y librar a los territorios ricos en biodiversidad de la explotación de las grandes corporaciones, se hace necesario que las organizaciones de defensa de los campesinos (Vía Campesina y muchas otras) y de las diversas comunidades indígenas, sigan coordinando sus luchas y presentando demandas ante los organismos regionales e internacionales competentes. De este modo se podría denunciar, sensibilizar y oponer resistencia al

deterioro medioambiental que afecta a la vida de la región. Son varios los casos presentados por diversas de estas organizaciones sociales regionales contra varios gobiernos de América Latina en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización de Estados Americanos (OEA), y ante comisiones y tribunales sub-regionales, como en las instancias de Mercosur y otras.

En ese sentido, los gobiernos deben seguir trabajando como punto de arranque para eliminar la inseguridad y para reducir el principal problema: la enorme desigualdad económica que conduce a la pobreza. Y el mejor modo de conseguirlo, como señalan todos los estudios sobre desarrollo, es implementar políticas sociales en educación y sanidad. Cierto es que a ello se están dedicado la mayoría de gobiernos que, con un fuerte compromiso social, han ido apareciendo por todo el continente en la última década. Pero no siempre la voluntad de reducir la desigualdad se plasma en prácticas respetuosas con los derechos culturales y ambientales de las comunidades campesinas e indígenas. Ese camino es incompatible con los DESC de los campesinos que piden se preserven sus derechos medioambientales con la Pacha Mama.

Los gobiernos tienen el dilema de optar por un desarrollo rápido mediante la explotación de sus recursos y favorecer un desarrollo entendido como crecimiento del PIB. Lo cual, desde un punto de vista de sostenibilidad económica, se podía traducir en la ecuación de «pan para hoy y hambre para mañana»; o bien optar por un desarrollo sostenible con el medio ambiente que, aunque más lento, retrasará la eliminación de las desigualdades, pero que sería mejor acogido por los campesinos pues además ayudaría a reducir la violencia generada por la explotación de recursos. Este es un aspecto hoy muy presente en gran parte de las políticas de los estados, así como de las organizaciones multilaterales, como es el caso de Mercosur.

Para ayudar a ese tipo de desarrollo sostenible, algunos estados han desarrollado una mayor integración regional y de toma de conciencia de los problemas para encontrar soluciones. Estas cuestiones han empezado a ser abordadas mediante una serie de acuerdos, programas y planes de acción por parte de diversas instituciones regionales, como Mercosur, Unasur, Celac y otras. La tendencia es la regionalización de estas cuestiones, sobre todo por la falta de compromiso de las naciones desarrolladas (como EEUU) con los aspectos ambientales, como se pudo ver en las conferencias y cumbres internacionales recientes como Rio+20. Incentivar a las organizaciones regionales y hacer que los acuerdos sean más vinculantes en el ámbito ambiental será más productivo, sobre todo teniendo en cuenta la percepción de gran parte de la población del neocolonialismo económico y político con que el Norte impone al Sur de manera unilateral ciertos valores. Valores que a su vez no son contemplados por los países industrializados del Norte de forma integral, como por ejemplo en el caso de la lucha contra la degradación ambiental.

La única posibilidad que tienen los gobiernos para acabar con las violencias hasta aquí señaladas es poner en marcha políticas integrales de desarrollo que abarquen todos los ámbitos de la seguridad humana: económica, alimentaria, medioambiental, cultural, salud, personal, política y ambiental; de planificación familiar y control de natalidad; de educación, vivienda y empleo. Solo así, con una planificación a largo plazo, se podrán ir reduciendo las desigualdades y la violencia.

Cierto es que cada día existe una mayor comprensión, por parte de los gobiernos de los problemas sociales y de seguridad, en parte debido a la presión ejercida por la población, lo cual impulsa a que los gobiernos regionales se vean obligados a buscar soluciones e implementar políticas que satisfagan mejor el interés general y el bien común. Esta preocupación se extiende, por ejemplo, a la disminución de la desigualdad regional entre los países de América Latina, en cuestiones de cooperación estructural, en energías renovables, transportes y agricultura familiar. En ese sentido, las diferentes cumbres de coordinación en

No siempre la voluntad de reducir la desigualdad se plasma en prácticas respetuosas con los derechos culturales y ambientales

La única posibilidad que tienen los gobiernos para acabar con las violencias hasta aquí señaladas es poner en marcha políticas integrales de desarrollo creando más espacios para el diálogo y la participación donde se puedan plantear las reivindicaciones de la población

América Latina para la integración regional son iniciativas provechosas para la cooperación en materias de desarrollo sostenible y de seguridad humana. Estas iniciativas se encuentran plasmadas en diversos documentos de cooperación de las organizaciones regionales, como por ejemplo en los Planes Estratégicos de Acción Social, elaborados por Mercosur,⁴⁵

No se puede negar que hay una intensificación de las instituciones regionales a la hora de impulsar la cooperación para el desarrollo de una economía más sostenible, por la seguridad y la paz. Estas políticas deben ser profundizadas permitiendo una mayor participación de los pueblos de Latinoamérica, creando más espacios para el diálogo y la participación donde se puedan plantear las reivindicaciones de la población para la erradicación de la desigualdad estructural y la disminución de la violencia, y con esfuerzos aún más rigurosos contra los crímenes ambientales que esconden un alto grado de violencia y que afectan, no solo a la naturaleza, sino también a las poblaciones que en ella habitan.

45. Mercosur, *Planes Estratégicos de Acción Estructural*, <http://gd.mercosur.int/>

INFORME 2007

Exportaciones españolas de armamento 1997-2006

Tica Font
Junio de 2008

INFORME 2008

Exportaciones españolas de armamento 1998-2007

Tica Font
Octubre de 2008

INFORME Núm. 3

El gasto militar del Estado español para el año 2009

Pere Ortega
Noviembre de 2008

INFORME Núm. 4

Alianza de barbaries Afganistán 2001-2008. 10 razones para cuestionar (y repensar) la implicación extranjera

Alejandro Pozo Marín
Diciembre de 2008

INFORME Núm. 5

Gasto e I+D militar en los presupuestos del estado español año 2010

Pere Ortega y Xavier Bohigas
Diciembre de 2009

INFORME Núm. 6

Exportaciones españolas de armamento 1999-2008

Tica Font y Francesc Benítez
Marzo de 2010

INFORME Núm. 7

La verdad del gasto militar español 2011. Gasto e I+D militar en tiempos de crisis

Pere Ortega y Xavier Bohigas
Diciembre de 2010

INFORME Núm. 8

Exportaciones españolas de armamento 2000-2009

Tica Font
Febrero de 2011

INFORME Núm. 9

El controvertido comercio de armas español, un negocio secreto 2001-2010

Tica Font y Francesc Benítez
Octubre de 2011

INFORME Núm. 10

Escudo antimisiles en la base de Rota. Un paso más en la militarización mundial

Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas
Febrero de 2012

INFORME Núm. 11

La Banca Armada. Inversiones explosivas de los bancos y cajas.

Ránquing de la banca armada en España

Jordi Calvo Rufanges
Marzo de 2012

INFORME Núm. 12

El complejo militar-industrial. Un parásito en la economía española

Pere Ortega y Camino Simarro
Abril de 2012

INFORME Núm. 13

Piratería en Somalia:

¿excusa u oportunidad geopolítica

Una mirada diferente a la participación militar española e internacional contra la piratería

Loretta P. Martín, Teresa de Fortuny y Xavier Bohigas
Diciembre de 2012

INFORME Núm. 14

Verdades y mentiras en el presupuesto militar español de 2013

Pere Ortega
Octubre de 2012

INFORME Núm. 15

Exportaciones españolas de armamento 2002-2011. Cuando la venta de armas es una prioridad política

Tica Font, Eduardo Melero y Camino Simarro
Enero de 2013

Centre d'Estudis per la Pau JM Delàs

Justícia i Pau, Rivadeneyra 6, 10è · 08002 Barcelona · T. 93 317 61 77 · F. 93 412 53 84

www.centredelas.org · info@centredelas.org

JUSTÍCIA I PAU

CENTRE D'ESTUDIS
PER A LA PAU
JMDELÀS

Grafismo: col·laboración de la Fundació Tam-Tam